

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas.

BOLETÍN Nº 5.301-05

HONORABLE SENADO:

Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de emitir su informe acerca del proyecto de ley de la referencia, iniciado en Mensaje de S.E. la señora Presidenta de la República, con urgencia calificada de “simple”.

Cabe hacer presente que la iniciativa fue discutida sólo en general, en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento del Senado.

A una o más de las sesiones en que la Comisión se ocupó de este asunto asistieron, además de sus miembros, en calidad de invitados, del Ministerio de Hacienda, la Ministra subrogante, señora María Olivia Recart, y los asesores señora Jacqueline Saintard y señores Héctor Lehuedé y Rodrigo González.

En la misma calidad concurrieron, además, el académico de la Universidad de Los Andes, señor Marco Antonio González, y el economista señor Álvaro Clarke.

- - -

NORMA DE QUÓRUM

A juicio de vuestra Comisión, el artículo 241 contenido en el número 43) del artículo 1º del proyecto de ley, debe ser aprobado como norma de quórum calificado, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del número 23º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso tercero, de la misma Carta Fundamental.

- - -

OBJETIVO DEL PROYECTO

El proyecto de ley busca perfeccionar la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas.

- - -

ANTECEDENTES

Para una adecuada comprensión de la iniciativa en informe deben tenerse presente los siguientes antecedentes:

A.- ANTECEDENTES JURÍDICOS

- Ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores.
- Ley N° 18.046, Ley de Sociedades Anónimas.
- Código de Comercio.

B.- ANTECEDENTES DE HECHO

El Mensaje de S.E. la Presidenta de la República señala, en primer lugar, que el Centro de Gobierno para la Empresa ha definido gobierno corporativo como “el conjunto de instancias y prácticas institucionales, en el proceso de toma de decisiones de la empresa, que contribuyen a la creación sostenible de valor en un marco de transparencia y responsabilidad empresarial, alineando incentivos y promoviendo el respeto a los derechos de los accionistas y grupos de interés que participan directa o indirectamente en la empresa”.

Enseguida, da cuenta de la importancia que el gobierno corporativo reviste, en primer término, porque regula las relaciones entre el cuerpo directivo de una empresa, su administración, sus accionistas y otras partes interesadas, asegurando un tratamiento equitativo entre los mismos y la transparencia en el mercado. En esa consideración, las prácticas de gobierno societario son de gran importancia tanto para la empresa en particular como para el mercado en su conjunto, toda vez que las relaciones referidas generan señales y efectos que contribuyen a perfilar este último, incidiendo favorablemente en el desarrollo de los mercados financieros y el desempeño de la economía.

En segundo lugar, porque utiliza mecanismos que estructuran de manera óptima los objetivos de las empresas, determinando los medios que pueden utilizarse para alcanzar dichos objetivos y supervisar su cumplimiento. En ese contexto, mejores gobiernos corporativos son indispensables para el surgimiento de empresas más eficientes y que alcanzan sus resultados de manera sustentable, teniendo presente no solamente los intereses de determinados accionistas, sino de todos los actores involucrados, incluidos sus clientes, proveedores y las comunidades con que las empresas se relacionan.

En concreto, añade, la existencia de un gobierno societario eficaz, que se ajuste a los estándares internacionales de gobierno corporativo y a los niveles de cumplimiento de los países desarrollados, genera beneficios económicos relevantes. A modo ilustrativo, un buen gobierno corporativo mejora sustancialmente tanto la gestión de las propias empresas como la percepción y confianza de los accionistas y del mercado, lo que se refleja en menores costos de capital y mayor dinamismo del mercado de capitales. Ello redundará, en definitiva, en un mayor crecimiento de la economía del país.

Realizando un diagnóstico de la realidad de los gobiernos corporativos en Chile, el Mensaje refiere que si bien recientes estudios nacionales e internacionales indican que nuestro país presenta, en general, un grado de cumplimiento razonable de los estándares de regulación, se evidencia que aún existen áreas que requieren de reforma y perfeccionamiento. Las prácticas de gobierno corporativo, destaca, se encuentran en permanente perfeccionamiento y evolución, adaptándose a las experiencias y lecciones extraídas de acontecimientos y casos críticos, poniendo constantemente a prueba la regulación existente.

En particular, dos recientes estudios en materia de gobiernos corporativos de empresas chilenas han ofrecido recomendaciones y sugerencias sobre aspectos en que es necesario corregir el funcionamiento de nuestras empresas. El primero de ellos, a modo de ejemplo, ha destacado que los directorios no están cumpliendo el rol estratégico que les correspondería. En efecto, sobre la base de encuestas, concluye que cerca de un cuarenta por ciento de las decisiones de la empresa se adoptan fuera del directorio y, más grave aun, directamente por el accionista controlador. Asimismo, los resultados muestran que sólo un número muy reducido de empresas poseen métodos que evalúen el desempeño de los directores, lo que resulta del todo contradictorio con su importancia dentro de la empresa y con una cultura empresarial en que se busca medir el desempeño de prácticamente todos los demás actores relevantes.

El segundo estudio, a su turno, recomienda que las empresas se comprometan formalmente a aplicar buenas prácticas de

gobierno societario y que monitoreen continuamente su funcionamiento, comunicando al mercado los cambios relevantes que se produzcan. Para estos fines, se destaca la necesidad de perfeccionar los mecanismos de divulgación de información al mercado, adoptar las políticas para prevenir el uso de información privilegiada, potenciar el funcionamiento del directorio e incorporar directores independientes, entre otras.

A continuación, el Mensaje explicita los cuatro principios fundamentales de la iniciativa legal en análisis:

1. Transparencia.

El proyecto busca aumentar el flujo de información al mercado, permitiendo a los accionistas y al regulador una mejor supervisión y evaluación de la empresa. La experiencia internacional indica que es indispensable que las empresas realicen un esfuerzo tendiente a ordenar, procesar y entregar información relevante a sus accionistas y al mercado, debiendo poner especial cuidado en que el acceso a esta información se pueda lograr en forma oportuna, precisa e igualitaria.

Por otra parte, el deber de velar porque no se abuse de la información privilegiada no puede quedar solamente entregado a la autoridad, puesto que es en directo interés de los accionistas de la empresa evitar que ello ocurra. En razón de lo anterior, el directorio debe ejercer un rol insustituible en la definición de políticas que promuevan la transparencia y definir, a través de directrices claras y eficientes que atiendan la realidad de la empresa, las normas que regulen las transacciones de los principales ejecutivos y directores de la empresa. En ésta y otras materias similares, el proyecto de ley encomienda a la Superintendencia que, sin perjuicio de sus facultades normativas generales establecidas en conformidad a su ley orgánica, dicte normas de carácter general que contribuyan a la formulación y mejor funcionamiento de las mencionadas políticas.

2. Corregir asimetrías de información, reducir los costos de información y coordinación.

Los accionistas, indica el Mensaje, especialmente si son dueños de un porcentaje menor de la empresa, no tienen incentivos suficientes para recabar la información, ni pueden coordinarse fácilmente para hacer valer sus derechos, situación que genera graves problemas de agencia y riesgos de abuso por parte de quienes tienen ventajas de información y coordinación. En ese escenario, se genera reticencia a invertir por parte de pequeños inversores lo que, en definitiva, deriva en una menor profundidad y desarrollo del mercado.

En particular, el abuso en perjuicio de los minoritarios puede originarse en transacciones desfavorables con partes relacionadas, apropiación de oportunidades comerciales y uso de información privilegiada, entre otros.

En consideración a lo anterior es que se proponen mecanismos que persiguen que los accionistas y el público obtengan acceso a información completa y oportuna, disminuyendo los problemas de asimetría de información, agencia y riesgos de abuso.

3. Fortalecimiento de los derechos de los accionistas minoritarios.

En concordancia con lo previamente señalado, y como forma de resolver los problemas planteados que afectan negativamente a los accionistas minoritarios y al mercado, el proyecto identifica la figura del director independiente como el mecanismo idóneo para la defensa de dichos actores. En efecto, el director independiente, actuando a través del comité de directores, se configura como la herramienta más eficaz y eficiente para proteger a los minoritarios y mejorar el flujo de información al mercado, sin privar a los accionistas controladores de sus legítimos derechos.

4. Autodeterminación.

En la medida de lo posible, los accionistas, a través de la junta o del directorio, deben tomar las decisiones claves acerca de cómo proceder en casos individuales, atendiendo a las circunstancias particulares de cada empresa y sus preferencias.

De acuerdo con los reseñados principios básicos, prosigue el Mensaje, se asegura una adecuada y oportuna divulgación de información, evitando las asimetrías que generan distorsiones y permitiendo, a su vez, que los accionistas puedan adoptar las mejores decisiones para cada caso, en atención a la realidad de la empresa.

En cuanto al contenido del proyecto de ley, finalmente, el Mensaje resalta las siguientes nueve materias:

1. Incremento de la divulgación de información al mercado, a través de varios mecanismos:

a. El directorio deberá preparar y actualizar una lista de los ejecutivos principales de la empresa.

b. Los sujetos obligados a comunicar sus transacciones en acciones de la compañía deberán hacerlo en tiempos más

breves y por sistemas más expeditos que los actuales, acorde con la velocidad a la que funcionan los mercados.

c. Los ejecutivos principales deberán informar públicamente su posición en valores de la sociedad y del grupo, y reservadamente su posición en valores de los principales clientes, proveedores y competidores.

d. El directorio deberá definir una política que asegure el flujo de información al mercado en el menor tiempo posible, con un responsable definido, y deberá revelar información a todos los accionistas de manera simultánea, reduciendo las ventajas informativas de quienes tienen mayor cercanía con la administración.

2. Uso de información privilegiada. Al efecto se propone:

a. Agregar la prohibición de vender los valores cuando se está en posesión de información privilegiada. Este supuesto había sido omitido por la ley actual y ya había sido objeto de una moción en idéntico sentido presentada por los diputados señores Jorge Burgos Varela, Juan Bustos Ramírez, Guillermo Ceroni Fuentes, Marcelo Díaz Díaz, Carlos Abel Jarpa Wevar, Carlos Montes Cisternas, Eduardo Saffirio Suárez y Patricio Vallespín López (Boletín N° 4.834-05), actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

b. Distinguir la presunción de posesión de información (aplicable a los sujetos que se desempeñan dentro de la administración de la empresa) de la presunción de acceso a la información (aplicable a actores que interactúan con la administración, sin ser parte de ella), lo que se traducirá en un estándar más alto para los primeros.

c. Exigir a los corredores y agentes de valores adoptar y hacer públicas las políticas que regulen las obligaciones y responsabilidades por el mal uso de la información de transacciones de sus clientes o de recomendaciones de sus analistas.

d. Establecer que es responsabilidad del directorio que las empresas adopten y hagan pública una política interna que determine las obligaciones y responsabilidades de sus ejecutivos principales respecto de la transacción de valores de la compañía, pudiendo optar por alguna de las alternativas contenidas en un repertorio que ofrece la ley (prohibición temporal, restitución a la empresa de las utilidades obtenidas en periodos determinados, prohibición total, etc.) y por una multa prevista en la ley, cuyo monto es a lo menos igual al beneficio ilegítimamente obtenido.

3. En relación con los directores independientes, las propuestas son el siguiente sentido:

a. Se pretende exigir que toda sociedad con alta capitalización bursátil, deba integrar al menos un director independiente a su directorio. Se entiende por tal a aquel que no mantiene ninguna vinculación con la sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, de un modo que pueda privar a una persona sensata de un grado razonable de autonomía, interferir con sus posibilidades de realizar un trabajo objetivo y efectivo, generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de juicio.

b. Se presume la dependencia, que impide ser director independiente, cuando ha existido, durante los últimos dieciocho meses, una serie de vinculaciones con la sociedad, entre las que destacan las de dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, así como la relación de parentesco y otras.

4. Comité de directores. A este respecto, el proyecto propone lo siguiente:

a. Deberá estar siempre constituido por una mayoría de independientes.

b. Deberá tener un presupuesto mínimo que le permita acceder a las herramientas necesarias para realizar una labor eficaz y acorde a sus funciones.

c. Tendrá mayores funciones y atribuciones, de manera que constituya una herramienta que promueva y facilite el mejor gobierno de la empresa.

d. Se facilita su acceso a los accionistas, al incluir su informe anual en la memoria de la compañía.

5. En relación con las operaciones con partes relacionadas y conflictos de interés, el proyecto postula:

a. Crear un nuevo Título en la Ley sobre Sociedades Anónimas, que regula estas operaciones para las sociedades anónimas abiertas.

b. Establecer un procedimiento reglado para resolver los conflictos, que contiene la obligación de explicitarlos y exige que los directores comprometidos se abstengan de votar, pero no de dar su opinión.

c. Otorgar mayor protagonismo al comité de directores para velar por los intereses de los minoritarios en estos casos.

d. Permitir que operaciones con partes relacionadas que son habituales, de bajo monto o que se realizan con filiales, sean realizadas con una simple aprobación del directorio.

6. Funcionamiento de la junta de accionistas. A su respecto se propone:

a. Potenciar el funcionamiento, estableciendo medidas que buscan que los accionistas dispongan de más y mejor información con la cual poder ejercer su voto.

b. Establecer la obligación de entregar información, efectuar citaciones y publicar la memoria, entre otros, vía sitio en Internet para las compañías que dispongan de tales medios.

c. Aumentar las decisiones de la junta que requieren del quórum de 2/3 de las acciones emitidas con derecho a voto, en lo que dice relación con la independencia de los auditores y respecto de la venta de los activos o negocios de sus filiales, cuando sean relevantes.

7. Voto de accionistas. Al efecto:

a. Se perfeccionan las normas que regulan el voto de los accionistas, permitiendo que las empresas adopten, con autorización de la Superintendencia, mecanismos de voto a distancia que incentiven una mayor participación de minoritarios.

b. Se regula el voto de los agentes de valores y corredores de bolsa, quienes no podrán votar por las acciones que mantienen bajo su custodia si no cuentan con instrucciones expresas de sus clientes.

c. Se establece que el controlador debe votar primero y públicamente, de manera de dar a conocer claramente su opinión a los accionistas minoritarios.

d. Se exige que toda materia de decisión en que existan dos o más opciones debe estar fundamentada por escrito, y dichos fundamentos deben ser puestos a disposición de los accionistas con anticipación a la junta.

e. Los candidatos a director independiente deben ser anunciados con anticipación, y en su elección el voto del controlador no será decisivo.

8. Auditoría externa. En este ámbito se propone:

a. Elevar los estándares aplicables a los auditores externos, de manera de garantizar una mayor seguridad e idoneidad técnica. Para estos efectos, se introducen normas que buscan asegurar la rigurosidad de los informes de auditoría y la obligación de los auditores de asistir a la junta para responder las preguntas de los accionistas. Asimismo, se imponen ciertas prohibiciones e incompatibilidades para los socios de las empresas de auditoría externa.

b. Requerir un quórum de 2/3 de las acciones emitidas con derecho a voto para adoptar la decisión de renovar a los auditores o para autorizarlos a prestar a la empresa servicios complementarios a la auditoría, cuando ello pueda generar riesgo de falta de independencia.

9. Perfeccionamientos a las Ofertas Públicas de Adquisición de Acciones (OPAs). A este respecto se propone:

a. Eliminar la obligación de una segunda OPA cuando el controlador adquiere 2/3 de las acciones en una OPA por el 100% que ha resultado exitosa.

b. Generar un derecho a retiro a favor de los minoritarios cuando el controlador alcanza un 95% de participación por la vía de una OPA por el 100% que ha resultado exitosa, de manera de no dejarlos sin influencia ni liquidez. Además, se confiere al controlador el derecho para comprar las acciones de aquellos accionistas que no hayan ejercido su derecho a retiro, permitiéndole al primero tomar control total de la compañía pagando el precio justo.

- - -

DISCUSIÓN EN GENERAL

Los **representantes del Ministerio de Hacienda** efectuaron una presentación del siguiente tenor:

Proyecto de ley de gobiernos corporativos

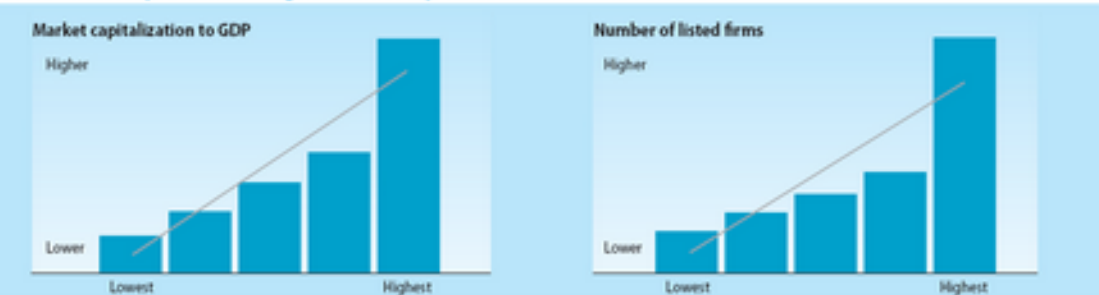
¿Por qué reformar el marco legal de los gobiernos corporativos de las empresas?.

¿Por qué reformar los gobiernos corporativos?

Porque son un componente clave de competitividad, como lo muestra el Banco Mundial.



Better investor protection—higher market capitalization and more listed firms



Gráficos relacionan la mayor o menor protección al inversionista en un determinado país con la mayor capitalización bursátil (tamaño del mercado de capitales) como porcentaje del PIB y el número de empresas abierta a la bolsa de ese mismo país.

¿Por qué reformar los gobiernos corporativos?

Porque no podemos quedarnos atrás respecto de los estándares mundiales (nuestro ranking es 33)



TABLE 7.1
Where are investors protected—and where not?

Most protected	Rank	Least protected	Rank
New Zealand	1	Guinea	169
Singapore	2	Micronesia	170
Hong Kong, China	3	Palau	171
Malaysia	4	Venezuela	172
Canada	5	Djibouti	173
Israel	6	Suriname	174
United States	7	Swaziland	175
Ireland	8	Lao PDR	176
South Africa	9	Tajikistan	177
United Kingdom	10	Afghanistan	178

Ranking ubica a los países de acuerdo a la fuerza de su protección a los inversionistas.

- Porque debemos cautelar la confianza de 8 millones de afiliados a las AFPs y más de un millón de partícipes en fondos mutuos.

- Porque la evaluación de organismos internacionales (ROSC, Banco Mundial) y muchos otros estudios demuestran que nuestros estándares distan de ser los óptimos. De hecho, en estos días la OCDE está analizando nuestra normativa, en el contexto del ingreso de Chile a esa organización.

- Porque queremos un mercado sólido y dinámico, que financie los proyectos de nuestros emprendedores y el crecimiento de este país con liquidez y buenas prácticas, que atraigan a los institucionales extranjeros que representan buena parte de la inversión mundial.

- Porque existen incentivos cruzados ineludibles en esta materia: Puesto que así como alentamos las aperturas bursátiles mediante incentivos tributarios, debemos ofrecer protección a los inversionistas que compran esas acciones. Sobreproteger puede inhibir aperturas, mientras que los abusos pueden alejar a los inversionistas.

- Por otro lado, sabemos que sobre-regular aumenta los costos y entraba los negocios, pero la falta de regulación es también dañina. No podemos seguir esperando una autorregulación voluntaria que nunca llega y que, además, no es sustituto perfecto del marco legal de un país, según demuestra la evidencia internacional.

El equilibrio es la clave. Eso buscamos.

¿Qué reformas incorpora el proyecto?

Reformas principales del proyecto:

- Distinción entre emisores de valores de oferta pública y sociedades anónimas abiertas.

- Divulgación de información al mercado.

- Uso de información privilegiada.

- Directores Independientes y Comité de Directores.

- Operaciones con partes relacionadas y conflictos de interés.

voto de accionistas.

- Funcionamiento de la Junta de Accionistas y

- Regulación de auditoría externa.

- Perfeccionar aspectos de las OPAs.

Emisores de valores y anónimas abiertas.

Superposición actual. Hoy existe confusión entre los requisitos aplicables a sociedades anónimas abiertas (que debieran estar solamente en la ley de sociedades anónimas) con los aplicables a emisores de valores (que debieran estar solamente en la ley sobre mercado de valores). La propuesta busca separar los requisitos en dos categorías claras, cada una en su respectiva ley, de manera que sociedades anónimas abiertas que no hagan emisión de valores de oferta pública se rijan por un estatuto diferente del que se aplica a los emisores de oferta pública.

Focalización. Esto facilita el trabajo de las Superintendencias y permite una mejor focalización hacia los emisores de instrumentos que son relevantes para el mercado de capitales. Al mismo tiempo, libera de carga burocrática a empresas que no comprometen la fe pública al no hacer oferta pública de sus valores.

Divulgación de información al mercado.

Ejecutivo principal. Se redefine, recurriendo a su “capacidad de planificar, dirigir o controlar la conducción superior de los negocios o la política estratégica de la entidad, ya sea por sí solo o junto con otros”. No importa el título y se le imponen mayores responsabilidades, como informar su posición en valores de la sociedad y del grupo y de los principales clientes, proveedores y competidores de la sociedad.

Transacciones. Los accionistas que controlen 10% o más de las acciones de la sociedad y los ejecutivos principales, deben informar de toda adquisición o enajenación, directa o indirecta, que efectúen de valores de esa sociedad. Reporte en el mismo día y por medio de tecnología. Incluye derivados.

Divulgación de información al mercado.

Política Interna (autorregulación). Además de la regulación existente, el directorio debe definir una política conforme a la cual la información esencial sea comunicada y difundida inmediatamente. No es

excusa para no informar el que no haya sesión de directorio. Directorio responsable. Menor plazo para hechos reservados.

Igualdad y Simultaneidad. Será responsabilidad del directorio que la información de la sociedad no sea divulgada a uno o más potenciales inversionistas, antes de ser puesta a disposición de todos los accionistas y el público. Se entenderá que se cumple con este requisito cuando simultáneamente a dicha divulgación, se proporcione la misma documentación o presentaciones en el sitio en Internet de la sociedad.

Divulgación de información al mercado.

Accionistas informados. Es responsabilidad del directorio, delegable, la custodia de los registros sociales y que éstos sean llevados con vigencia y regularidad. Asimismo, que la memoria, el informe de los auditores externos y los estados financieros auditados de la sociedad, deban ponerse a disposición de los accionistas en el sitio en Internet.

Oportunidad efectiva de votar. Las materias sometidas a voto de la junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime, se proceda por aclamación. Se exige informar a los accionistas la forma de obtener copias de los documentos que fundamentan las opciones sometidas a voto, que deberán además ponerse a disposición en Internet.

Uso de información privilegiada.

Autorregulación: política interna. Más allá de la prohibición legal de transar con información privilegiada, se hace responsable al directorio de velar porque no se abuse de los accionistas, para lo cual deberán adoptar y hacer pública una política interna que determine las reglas conforme a la cuales los ejecutivos principales podrán adquirir o enajenar, directa o indirectamente, valores de la sociedad (incluye derivados). La ley ofrecerá alternativas de restricción de manera de reducir los costos de implementar la política: Una prohibición total y permanente de transar con acciones de la compañía, una prohibición total y transitoria de transar con acciones de la compañía, llamado período de “black-out”, definido por el directorio en atención a los eventos y procesos de la empresa, o una regla que impida o limite la “timba”, estableciendo un tiempo mínimo de tenencia de las acciones que adquieran los ejecutivos.

Presunciones de posesión más focalizadas. Se establecen presunciones diferenciadas según si los sujetos son “insiders” (ejecutivos principales del emisor o del inversionista institucional, así como las entidades controladas, directa o indirectamente, por ellos, los ejecutivos

principales del controlador del emisor o del inversionista institucional, etc.) o “outsiders” (los ejecutivos principales y dependientes de las empresas de auditoría externa, los ejecutivos principales y miembros de los consejos de clasificación de las sociedades clasificadoras de riesgo, las personas que presten servicios de asesoría permanente o temporal al emisor o inversionista institucional, etc.), lo que permite ser más exigente con unos y facilitar el descargo de la responsabilidad de los otros.

“Front running”. Se establece la obligación para corredores y agentes de valores de adoptar y hacer pública una política que regule los procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades que les serán aplicables en el manejo de la información de las decisiones de adquisición, mantención o venta de sus clientes, así como de **sus estudios y recomendaciones**.

Difusión de Rumores y Noticias Falsas. En el artículo 61 y siguientes de la Ley de Mercado de Valores se mejora la regulación de las sanciones por difusión de rumores e informaciones mal intencionadas sobre un emisor o sus valores.

Directores Independientes.

Obligación. Toda sociedad con capitalización bursátil sobre UF 1 MM y 12,5% de sus acciones en poder de los minoritarios deberá contar con al menos un director independiente.

Nueva definición. “No mantiene ninguna vinculación con la sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda privar a una persona sensata de un grado razonable de autonomía, interferir con sus posibilidades de realizar un trabajo objetivo y efectivo, generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de juicio”.

Presunción de dependencia. económica, profesional, crediticia o comercial; relación de parentesco; principales proveedores, clientes o competidores del giro de la sociedad, entre otras.

Comité de directores.

Integración. Comité debe estar siempre integrado por una mayoría de independientes. Si hay solamente un independiente, se le otorga voto controlador del comité, de manera de asegurar su funcionamiento independiente de la administración.

Presupuesto. Debe tener un presupuesto mínimo para poder ser eficaz y sus miembros deben tener una remuneración acorde a sus mayores funciones.

Aumenta sus obligaciones y su acceso a los accionistas. Sin reemplazar al directorio, se le permite tener mayor oportunidad de revisar la marcha de la empresa, revisar las operaciones con partes relacionadas y la interacción con los auditores, proponiendo al directorio la mejor forma de proceder.

Partes relacionadas y conflictos de interés.

Nuevo Título. Se recoge la normativa del proyecto anterior, generando un nuevo Título en la Ley sobre Sociedades Anónimas que regula estas operaciones para las sociedades anónimas abiertas. Establece un procedimiento reglado para resolver los conflictos. Obliga a explicitar los conflictos y a que los directores comprometidos se abstengan de votar pero no de dar su opinión. Da mayor protagonismo al comité de directores para velar por los intereses de los minoritarios. Permite que ciertas operaciones con partes relacionadas pero que son habituales, de bajo monto o que se realizan con filiales sean realizadas con una simple aprobación del directorio.

Funcionamiento de la junta y voto.

Más información. Se potencia el funcionamiento de la junta de accionistas al establecer una serie de medidas que buscan que los accionistas dispongan de más y mejor información con la cual poder ejercer su voto. Se establece la obligación de entregar la información, informar de citaciones y publicar la memoria, entre otros, vía sitio web para las compañías que disponen de uno. Se exige que toda materia de decisión en que existan dos o más opciones debe estar fundamentada por escrito y esos fundamentos deben ser puestos a disposición de los accionistas con anticipación.

Más participación. Se perfeccionan las normas que regulan el voto de los accionistas permitiendo que las empresas adopten, con autorización de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), mecanismos de voto a distancia que incentiven una mayor participación de minoritarios. Se regula el voto de los agentes-custodios, quienes no podrán votar si no cuentan con instrucciones expresas.

Auditoría externa.

Estándares internacionales. Se elevan los estándares aplicables a los auditores externos de manera de garantizar una mayor seguridad e idoneidad técnica. Se establecen normas que buscan asegurar la rigurosidad de los informes de auditoría y la obligación de los auditores de asistir a la junta para responder las preguntas de los accionistas.

Independencia. Se prohíben algunos y se restringen otros de los servicios que los auditores pueden prestar a la empresa, en paralelo a la auditoría, para evitar la pérdida de independencia. Se establece que los auditores deberán informar a las empresas si han obtenido de ellas, en el año anterior, un porcentaje de sus ingresos que hace peligrar su independencia, entre otras materias.

Perfeccionar aspectos de las OPAs.

Segunda OPA. Se elimina la obligación de una segunda OPA cuando el controlador adquiere 2/3 de las acciones en una OPA por el 100% que ha resultado exitosa. Se regulan aspectos prácticos no resueltos y que generaban incertidumbres.

Derecho a retiro. Siguiendo la experiencia internacional, se genera un derecho a retiro a favor de los minoritarios cuando el controlador alcanza un 95% de participación por la vía de una OPA por el 100% que ha resultado exitosa, de manera de no dejarlos atrapados sin influencia ni liquidez.

Derecho de compra. En ese mismo caso, se genera el derecho del controlador de poder comprar las acciones de los accionistas que no hayan optado por ejercer su derecho a retiro, lo que en el derecho anglosajón se denomina “squeeze out”, que le permite tomar control total de la compañía pagando el precio justo.

A continuación, la **Honorable Senadora señora Matthei** consultó por cómo se precaven eventuales casos en que un director independiente, representante de accionistas minoritarios que a la vez son dueños de una empresa de la competencia, por ejemplo, tenga como objetivo primordial el entorpecimiento de la administración de la sociedad.

El **asesor del Ministerio de Hacienda, señor Héctor Lehuedé**, indicó que una situación como la descrita podría verificarse cuando un minoritario reúna una participación social en torno al 10% o 15%, caso en el que se estaría en presencia de un tremendo conflicto de interés al

interior del directorio, por tratarse de un director relacionado con un competidor de la compañía. Este director debiera, desde luego, abstenerse de participar en cualquier discusión concerniente a dicha compañía. A estos efectos, resaltó que previo a su designación, el candidato a director independiente debe suscribir una declaración jurada afirmando tal calidad, siendo responsable de los perjuicios civiles en caso de falsedad.

En la siguiente sesión, la Comisión conoció las opiniones, respecto del proyecto en análisis, del economista señor Álvaro Clarke y del académico de la Universidad de Los Andes, señor Marco Antonio González.

El **señor Clarke**, en primer lugar, hizo ver que una iniciativa de esta naturaleza, necesaria para una optimización en el funcionamiento de los gobiernos corporativos, cobra mayor relevancia en el marco actual de crisis económica mundial, pues el debate girará en torno a cuáles son los mecanismos idóneos, como el rol que desempeñen el Estado y las instancias decisorias al interior de las compañías, para evitar que situaciones como esta puedan en el futuro repetirse.

Sobre los diversos aspectos abordados por el proyecto, en particular, manifestó lo siguiente:

- Distinción entre emisores de valores y sociedades anónimas abiertas: dado que la ley vigente los confunde, diferenciarlos constituye sin duda un avance, pues la fiscalización que la SVS lleva a cabo, que se orienta sobre la oferta pública de valores, podrá ser adecuadamente focalizada.

- Divulgación de información al mercado: permite disminuir las asimetrías de información en el mercado financiero. La obligación de informar toda adquisición o enajenación de valores que efectúen los accionistas que controlen el 10% o más de las acciones, indicó, resulta del todo conveniente, pues es dable suponer que tanto éstos como los ejecutivos principales de una compañía cuentan con cierta información que el resto de los accionistas ignora.

La política interna de autorregulación, a su vez, contribuye a evitar que cualquier persona, al interior de una compañía, difunda noticias que no se encuentra en posición de hacer públicas, por lo que se hace responsable al directorio de su implementación. Así se ha experimentado en el derecho norteamericano, por ejemplo, donde se advirtió que desde muchas compañías emanaba información de distintas fuentes, que alteraba el precio de las acciones y hacía obtener ganancias sólo a ciertos ejecutivos. Uniformar estas materias, agregó, posibilitará que la fuente de información sea una sola, resguardando la igualdad y

simultaneidad en el conocimiento de los antecedentes, a fin de evitar situaciones como que las compañías convoquen solamente a sus grandes inversionistas, en desmedro de los accionistas minoritarios.

- Uso de información privilegiada: el proyecto acoge la moderna tendencia mundial de hacer responsable al directorio de diversas materias, como es una política interna conforme a la cual los ejecutivos principales podrán enajenar valores de la sociedad. En este ámbito, resaltó, políticas como los períodos de “black-out” (prohibición total y transitoria para los directores y ejecutivos principales de transar con acciones de la compañía), o que la venta de acciones por parte de los ejecutivos pueda hacerse sólo una vez transcurrido un determinado plazo desde que las adquirieron, serían absolutamente concordantes con un adecuado uso de esta clase de información.

Respecto del “Front running” (casos en que un operador de acciones conoce la forma en que se comportará la demanda porque maneja las carteras de grandes inversionistas institucionales, por ejemplo), hizo hincapié en que la transparencia del mercado exige, como consagra el proyecto, la adopción de una política pública que regule sus procedimientos. Similar importancia, añadió, revisten las sanciones por la difusión de rumores y noticias falsas, capaces de provocar daños incluso en compañías sanas.

- Directores independientes: la nueva definición, indicó, se ajusta al concepto imperante en Estados Unidos, en orden a tener independencia ya no sólo respecto del controlador, sino respecto de la sociedad misma.

- Comité de directores: destacó que, para el cumplimiento de sus funciones de monitoreo de la compañía, cuente con un presupuesto especialmente destinado al efecto.

- Partes relacionadas y conflictos de interés: un buen gobierno corporativo debe precaver que las transacciones con partes relacionadas se lleven a cabo a precio de mercado, lo que se logra con el proyecto propuesto.

- Auditoría externa: la iniciativa se ciñe a los estándares internacionales que rigen la materia, determinados por la IFAC (Internacional Federation of Accountants) y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), y que se encuentran uniformados a partir de la crisis que se vivió en los inicios de la presente década en Estados Unidos, donde algunas compañías alteraron sus estados financieros para incidir en los precios en que se transaban sus acciones, causando un enorme detrimento en la confianza en el mercado y pérdidas en el patrimonio de los accionistas. De dichos estándares, además, se espera resulten ser

aún más fuertes a partir de la presente crisis mundial, de lo que se sigue que las instituciones que los recomiendan, como Basilea en el caso de los bancos y la International Organization of Securities Comissions (IOSCO) en el de los mercados de valores, serán aún más estrictas en la exigencia de su cumplimiento, lo que repercutirá sin lugar a dudas en un país como Chile.

Algo similar, expresó, acontece al resguardarse la independencia que los auditores deben guardar respecto de las compañías a las que prestan servicios, al acogerse los estándares internacionales que sobre la materia rigen.

- Perfeccionamiento de las OPAs: lo más novedoso es el derecho de compra para el controlador sobre las acciones de los accionistas que no hayan ejercido el derecho a retiro. Se trata, indicó, de un aspecto de ordinaria ocurrencia en los mercados internacionales, pero que no fue incluido en nuestra legislación durante la tramitación de la ley de OPAs, pues luego de largas discusiones no hubo acuerdo, por estimarse que afectaba el derecho de propiedad de los accionistas minoritarios.

Posteriormente, hizo uso de la palabra el **señor González**, quien manifestó que, en términos generales, el proyecto representa adecuadamente el consenso existente en torno a los perfeccionamientos que los gobiernos corporativos requieren, sin perjuicio de lo cual contiene algunas materias susceptibles de ser examinadas y, eventualmente, modificadas, que se pueden agrupar en los siguientes temas:

1) Equilibrio entre accionistas controladores y minoritarios. A nivel mundial, señaló, se está revisando si resulta o no conveniente otorgar cada vez más derechos a los minoritarios. A partir del año 2000, la legislación nacional comenzó a entregar crecientes atribuciones a esta clase de accionistas para que pudieran ejercer mayores controles sobre la sociedad, siguiendo el modelo norteamericano en el que la propiedad de las sociedades se encuentra altamente difundida. Esta realidad, sin embargo, no se verifica en Chile, donde, en promedio aproximado, los controladores tienen el 62% de la sociedad y los minoritarios el 36%, cuestión que ha redundado en que aquéllos, para evitarse conflictos, terminen comprando las participaciones de éstos, a quienes perciben como una carga en el desarrollo societario. De suerte que seguir confiriéndoles más facultades puede resultar contraproducente con una buena administración de la sociedad, pues se requieren controladores fuertes que asuman la responsabilidad de la gestión.

Reseñó, al efecto, tres aspectos de la iniciativa en estudio que resultan atentatorios contra el pretendido equilibrio.

- La ley vigente, que entiende por independiente al director que ha sido elegido sin los votos del controlador, ha posibilitado situaciones como que un director así elegido, con los votos de los minoritarios, pueda con el tiempo volver a ser elegido, pero esta vez por los votos del controlador. Si, como el proyecto establece, se agrega a lo anterior el criterio imperante en los países desarrollados de elegir como directores independientes a personas que no tengan vínculo alguno con el controlador, lo que ocurrirá es que, en un país pequeño como el nuestro, no habrá suficientes personas naturales habilitadas para asumir ese rol. Además, privando a los controladores de la facultad de seleccionar a estos directores se está desconociendo una realidad, cual es que en varias sociedades anónimas abiertas grandes los directores más independientes son precisamente los elegidos por los controladores, que escogen a profesores universitarios o importantes economistas que, dado que tienen un prestigio profesional que resguardar, resultan ser quienes más cuestionan las decisiones de los controladores de la sociedad.

- La expansión de las facultades del comité de directores, que son excesivamente detalladas, a su juicio, por el proyecto, en circunstancias que debieran quedar entregadas a lo que cada sociedad determine.

En el mismo sentido, hechos como contemplar para los integrantes del comité una remuneración superior a la del resto de los directores titulares, que se destine un presupuesto especial para su funcionamiento y para el financiamiento de sus asesores, o la posibilidad de constituirse en subcomités, indicó, parecen excesivas y no se condicen con la filosofía propia de una sociedad y con cuestiones que debieran ser naturales, como trabajar coordinadamente con los gerentes y el resto de la administración.

Por lo demás, añadió, los mayores costos económicos que medidas como las precedentemente señaladas irrogarían, serían demasiado onerosas para las pequeñas y medianas sociedades anónimas que pretendan abrirse al mercado. Al efecto, sostuvo que una solución sería diferenciar los estándares entre las sociedades enlistadas en las bolsas de Nueva York o Europa, de un lado, y las que sólo lo están en Chile, del otro.

El **asesor del Ministerio de Hacienda, señor Lehuedé**, acotó que, en todo caso, el proyecto no viene proponiendo un esquema de mayoría de directores independientes, como lo hace la legislación norteamericana, sino sólo al menos uno, cuando la empresa tenga una presencia de accionistas minoritarios tal que justifique su presencia en el directorio.

Reseñó, enseguida, un estudio que indica que en las empresas en las cuales invierten las AFP, que cuentan con representantes de los accionistas minoritarios y con comité de directores, sus acciones valen un 14% más que las de aquellas en las que no invierten las AFP.

El **señor González** prosiguió con su intervención.

2) Autorregulación. Dado que el proyecto considera el sustancial avance de entregar a las empresas la responsabilidad de desarrollar culturas internas de fiscalización, sería bueno, indicó, conocer su compatibilidad con el nuevo sistema de fiscalización de supervisión basada en el riesgo que la SVS ha anunciado.

De todos modos, respecto de ciertas materias, como la difusión de información, hace falta distinguir de modo preciso si han de ser obligatorias o voluntarias, pues si no queda claro su carácter imperativo puede dar lugar al incumplimiento de prácticas que son altamente deseables.

3) Información privilegiada. En su oportunidad, explicó, nuestro ordenamiento jurídico tomó la opción de no tolerar las transacciones con información privilegiada. Algunas de las propuestas del proyecto, a su juicio, parecieran no ir en el mismo sentido y tienden más bien a resguardar esta clase de información.

Calificó, enseguida, como un error incluir a todos los miembros o quienes se desempeñen en el controlador entre quienes se presume poseen información privilegiada, pues si bien la cantidad de gente que puede ser perseguida por su uso es mucha, la probabilidad de sancionarla es más bien baja, por lo que resultaría más recomendable enfocarse en quienes tienen efectivamente la obligación de guardar la información, como los ejecutivos o los directores de la sociedad.

Por otra parte, hizo hincapié en que la obligación de resguardar la información privilegiada existe desde que se tiene dicha información, no desde que se tiene acceso a ella. Para quienes tengan acceso directo a ella, el proyecto establece la presunción de posesión de información privilegiada.

Finalmente, criticó que se incluya en la presunción a los convivientes de los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales y liquidadores, por la dificultad probatoria que implicaría.

4) Regulaciones del mercado de valores. El proyecto de ley considera facultar, en la LMV, a la SVS para establecer,

mediante normas de carácter general, cuáles tipos de oferta de valores constituyen ofertas públicas y cuáles ofertas privadas, cuestión jurídicamente discutible, por cuanto dicho concepto es el que determina la aplicación de la ley y las facultades de la Superintendencia.

Del mismo modo, hizo ver que sería conveniente que los emisores deban previamente inscribirse como tales y sólo posteriormente proceder a la inscripción de las emisiones de valores, asunto que el proyecto prohíbe.

Respecto del derecho a voto, y a la prohibición propuesta para que los intermediarios de valores que tienen acciones en custodia puedan votar, a menos que cuenten con instrucciones expresas, señaló que se trata de un error, porque no fortalece las posibilidades de voto y porque es completamente razonable que si se entrega a alguien la confianza de tener las acciones a su nombre, se le entregue también la confianza de que pueda votar, a menos que expresamente se le prive de hacerlo.

Hizo referencia, enseguida, a que la ley actual establece la prorrata como criterio obligatorio para repartir las órdenes de OPAs, cuestión que ha sido discutida por la doctrina, que tiende a inclinarse por que exista, para quien formula la oferta, la opción de elegir entre un sistema de prorrata o por el orden de llegada de los interesados en ella. Esto pues lo que ha ocurrido, en la práctica, es una suerte de especulación por parte de accionistas minoritarios e inversionistas, que aceptan inicialmente la OPA, luego se retractan y vuelven finalmente a aceptarla, lo que causa un daño profundo al mercado. Si, en cambio, se respetara el orden de llegada, se cumple el doble objetivo respetar los intereses de los minoritarios y de obligarlos, al mismo tiempo, a manifestar preferencia, de manera de garantizar la seriedad del proceso.

Finalizando su exposición, manifestó sus alcances puntuales respecto de los siguientes temas propuestos:

- La obligación para los directorios de las sociedades anónimas abiertas de grabar sus sesiones, salvo acuerdo unánime en contrario, puede resultar contraproducente con el ideal de transparencia que se busca, pues si se considera que normalmente las personas hablan con menos confianza cuando están siendo grabadas, podría desencadenarse un desarrollo de reuniones informales fuera del ámbito de las sesiones de directorio para tratar los temas que son propios de éste.

- El establecimiento de un período ininterrumpido que exceda de 10 días de reunión de todas las acciones de la sociedad anónima en una sola mano, para que se verifique su disolución, constituye

una suerte de agonía que no logra justificarse. Más recomendable sería, opinó, zanjar definitivamente que se disuelve la sociedad o que se requieren dos socios para que pueda seguir existiendo, pero no dejar un período que da espacio a la incertidumbre.

- El derecho para el controlador, cuando así se haya establecido en los estatutos, de exigir a los accionistas minoritarios que no opten por ejercer su derecho a retiro la venta de sus acciones, siempre que haya alcanzado más del 95% de las acciones de la sociedad fruto de una OPA, no se advierte conveniente, pues viene a entregar una nueva herramienta para que el controlador pueda deshacerse de los minoritarios, obligándolos a salir de la sociedad.

- La entrega de diversas facultades a la SVS para efectuar regulaciones, que puede colisionar con lo señalado en varios fallos del Tribunal Constitucional en orden a que dichas facultades son privativas de la ley, como es en el caso de la regulación de una actividad económica. Un ejemplo es el de la atribución que se contempla para la Superintendencia de autorizar el voto a distancia en las juntas de accionistas. Se trata de una materia que fue motivo de fuerte debate en su oportunidad y sobre la que no hubo acuerdo, por lo que no fue incluida en la ley. Sin embargo, el presente proyecto la somete a la regulación de la SVS, mediante una norma de carácter general.

En el mismo sentido, culminó, el artículo tercero transitorio de la iniciativa ordena a la Superintendencia dictar una norma de carácter general que constituya el Código del Emisor de Valores de Oferta Pública, indicando circunstanciadamente la forma que deberá seguir. Empero, acto seguido dispone que “en lo posible” deberá establecer la mayor cantidad de reglas comunes para distintos tipos de emisiones y de emisores de valores, lo que hace perder toda fuerza y sentido al imperio de la norma.

La **Honorable Senadora señora Matthei** expresó su conformidad, en general, con las disposiciones que el proyecto contiene. No obstante, hizo ver que debe analizarse con atención la posibilidad que, por otorgar mayores derechos a los accionistas minoritarios de la sociedad para evitar los abusos de los mayoritarios, se pase a una situación inversa en la que sean aquéllos quienes hagan dificultosa la administración societaria.

Por otro lado, solicitó a los representantes del Ejecutivo información acerca de la realidad de la tenencia accionaria minoritaria en la bolsa chilena durante los últimos diez años.

El **Honorable Senador señor Ominami** consultó si existe un indicador de cuántas son las empresas a las que sería aplicable un modelo de gobiernos corporativos como el que se viene proponiendo.

Asimismo, sostuvo que sería conveniente conocer las impresiones de los representantes de la bolsa nacional y de estudiosos de la realidad en los gobiernos corporativos de Estados Unidos y Europa.

El **Honorable Senador señor Escalona** solicitó conocer una estimación acerca de los volúmenes de capitales involucrados ante la eventual aplicación del modelo de gobiernos corporativos.

Del mismo modo, puso de relieve ciertas situaciones en que son los ejecutivos de las sociedades quienes, a través de la administración, terminan controlando a los controladores y accediendo, en algunos casos, a recursos financieros que, como ha ocurrido con la presente crisis económica, provienen de planes fiscales de salvataje a las compañías.

En votación en general el proyecto de ley, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores señora Matthei y señores Escalona, García, Ominami y Sabag.

- - -

INFORME FINANCIERO

El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, con fecha 28 de agosto de 2007, señala lo siguiente:

El presente proyecto de ley efectúa una serie de modificaciones a la ley de Mercado de Valores (Ley N° 18.045) y de Sociedades Anónimas (Ley N° 18.046), con el propósito de introducir importantes perfeccionamientos a las normas regulatorias en materia de gobiernos corporativos de las empresas.

Entre los objetivos principales que persigue esta iniciativa legal, es posible destacar, entre otros, el profundizar el mercado bursátil, al elevar a estándares internacionales la protección a inversionistas en Chile; potenciar el funcionamiento de los directorios; mejorar la transparencia de los mercados, reduciendo de esta forma la volatilidad de los precios; perfeccionar el rol de los auditores externos y garantizar la equidad entre participantes del mercado.

Teniendo presentes los objetivos antes señalados, las principales reformas propuestas en este proyecto de ley dicen relación con las siguientes materias:

- Divulgación de información al mercado
- Uso de información privilegiada
- Directores Independientes
- Comité de Directores
- Operaciones con partes relacionadas y conflictos de interés
- Funcionamiento de la Junta de Accionistas
- Voto de accionistas
- Auditoría externa
- Perfeccionar aspectos de las OPAs.

Finalmente, la aplicación de esta iniciativa legal no representa gasto fiscal.

En consecuencia, las normas de la iniciativa legal en informe no producirán desequilibrios macroeconómicos ni incidirán negativamente en la economía del país.

- - -

TEXTO DEL PROYECTO

En mérito del acuerdo precedentemente expuesto, vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de proponeros la aprobación en general del proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que fue despachado por la Honorable Cámara de Diputados, cuyo texto es el siguiente:

PROYECTO DE LEY

“ARTÍCULO 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores:

1) Modifícase el artículo 1º, de la siguiente forma:

a) Agrégase en el inciso primero, entre la expresión “valores;” y “los emisores” la frase “las sociedades anónimas abiertas;”.

b) Elimínase el inciso segundo.

artículo 3°.

2) Elimínanse los incisos tercero y cuarto del

3) Modifícase el artículo 4°, de la siguiente forma:

a) Sustitúyese el inciso segundo, por el siguiente:

“La Superintendencia establecerá, mediante norma de carácter general, cuáles tipos de ofertas de valores constituyen ofertas públicas y cuáles constituyen ofertas privadas, teniendo en consideración, entre otras materias, el número y tipo de inversionistas a los cuales se destina la oferta, los medios a través de los cuales se comunica o materializa la oferta, y el monto de los valores ofrecidos.”.

b) Sustitúyese en el inciso tercero la palabra “resoluciones” por “normas”.

4) Agrégase la siguiente letra f), en el artículo 4° bis:

“f) Inversionistas calificados: a los inversionistas institucionales e intermediarios de valores en operaciones de cuenta propia, como también aquellas personas naturales, personas jurídicas o entidades que la Superintendencia determine mediante norma de carácter general.”.

5) Modifícase el artículo 5° de la siguiente forma:

a) Sustitúyese en el inciso segundo la expresión “inscribirán” por la frase “deberán inscribir”.

b) Sustitúyese en la letra c) del inciso segundo la frase que va desde la expresión “a que se refiere el inciso segundo del artículo 1°, y” por la frase “anónimas y sociedades en comandita que tengan 500 o más accionistas o, a lo menos, el 10% de su capital suscrito pertenezca a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas, excedan dicho porcentaje, y”.

c) Agrégase en la letra d) del inciso segundo entre la palabra “sociedades” y la palabra “que”, la expresión “anónimas”, y antes del punto final (.) la frase “o que por obligación legal deban registrarlas”.

d) Agrégase el siguiente inciso final: “La solicitud de inscripción de un emisor en el registro de valores deberá estar necesariamente acompañada de una solicitud de inscripción de los valores que dicho emisor ofrecerá públicamente.”.

6) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 6°, la frase “los valores y sociedades” por las palabras “las acciones”; agrégase, entre la expresión “refiere” y la expresión “el”, las expresiones “la letra c)”, y sustitúyese la expresión “el inciso segundo del artículo 1°” por “del artículo 5°”.

7) Sustitúyese el artículo 7°, por el siguiente:

“Artículo 7°. Las personas o entidades que por disposición legal deban quedar sometidas a la fiscalización, al control o a la vigilancia de la Superintendencia y no sean de aquellas a que se refiere el inciso primero del artículo 1°, quedarán excluidas de esta ley, salvo mención expresa en contrario, y no estarán obligadas a inscribirse en el Registro de Valores. Sin embargo, las personas antes indicadas deberán ejecutar los actos y cumplir con las obligaciones de información que les impongan las leyes que las rigen.

La Superintendencia establecerá, por norma de carácter general, la información que las entidades indicadas en el inciso anterior y las sociedades anónimas especiales regidas por el Título XIII de la ley N° 18.046, que no sean emisoras de valores, deben proporcionar a la Superintendencia y al público en general. Dicha información deberá ser equivalente en calidad, periodicidad, publicidad y forma a la exigida a los emisores de valores, pero considerando la naturaleza o tipo de entidad y el propósito de la ley que la sometió al control de la Superintendencia. Para el debido control, la Superintendencia podrá determinar que las entidades informantes se inscriban en registros especiales fijando, por norma de carácter general, los requisitos para ello.”.

8) Modifícase el artículo 10, de la siguiente forma:

a) Reemplázase el actual inciso primero del artículo 10, por el siguiente:

“Artículo 10. Las entidades inscritas en el Registro de Valores quedarán sujetas a esta ley y a sus normas complementarias y deberán proporcionar información a la Superintendencia y al público en general con la periodicidad, publicidad y en la forma que la Superintendencia determine por norma de carácter general.”.

b) Agrégase en el inciso segundo, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido, lo siguiente:

“Será responsabilidad del directorio de cada entidad adoptar una política interna que contemple los procedimientos, normas de control interno y responsabilidades que aseguren dicha divulgación. La política respectiva, deberá ajustarse a la norma de carácter general que dicte la Superintendencia.”.

c) Modifícase el inciso cuarto, de la siguiente forma:

i) Elimínase la palabra “hábil”.

ii) Intercálase entre la palabra “adopción” y el punto final (.), la frase “por los medios tecnológicos que habilite la Superintendencia”.

9) Reemplázanse en el inciso primero del artículo 11, las expresiones “entidades distintas a las sociedades anónimas, pero sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de conformidad a la presente ley” por las expresiones “emisores de valores de oferta pública distintos de las sociedades anónimas”.

10) Modifícase el artículo 12, de la siguiente forma:

a) Reemplázase el actual inciso primero, por el siguiente:

“Las personas que directamente, o a través de otras personas naturales o jurídicas controlen o posean el 10% o más del capital suscrito de una sociedad anónima abierta, o que a causa de una adquisición de acciones lleguen a tener dicho porcentaje, así como los directores, liquidadores, ejecutivos principales, administradores y gerentes de dichas sociedades, deberán informar a la Superintendencia y a cada una de las bolsas de valores del país en que la sociedad tenga acciones registradas para su cotización, de toda adquisición o enajenación, directa o indirecta, que efectúen de acciones de esa sociedad o de contratos o valores cuyo precio o resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de dichas acciones, dentro del mismo día en que se ha efectuado la transacción o transacciones respectivas, por los medios tecnológicos que habilite la Superintendencia.”.

b) Agrégase el siguiente inciso tercero:

“La Superintendencia determinará, mediante norma de carácter general, los medios a través de los cuales se deberá enviar la información que establece este artículo.”.

11) Reemplázanse en el artículo 13 las expresiones “las sociedades fiscalizadas” por las expresiones “los emisores”.

12) Modifícase el artículo 15, de la siguiente forma:

a) Reemplázase la letra a), por la siguiente:

“a) En el caso de acciones cuando el emisor no ha reunido los requisitos establecidos en la letra c) del inciso segundo del artículo 5° de la presente ley durante el curso de los 6 meses precedentes;”.

b) En la letra b), reemplázanse las expresiones “un emisor inscrito voluntariamente lo solicite” por las siguientes “los valores hubiesen sido inscritos voluntariamente y así lo solicite su emisor”.

13) Reemplázase el epígrafe del Título IV, por el siguiente:

“TITULO IV

DE LAS TRANSACCIONES SOBRE VALORES DE OFERTA PÚBLICA”.

14) Agréganse los siguientes artículos 16, 17, 18, 19 y 20:

“Artículo 16. Los emisores de valores de oferta pública, deberán adoptar una política interna que establezca los procedimientos, normas de control interno y responsabilidades, conforme a las cuales los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales, así como las entidades controladas directa o indirectamente por ellos, podrán adquirir o enajenar, directa o indirectamente, valores de la sociedad o valores cuyo precio o resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de dichos valores.

Dicha política podrá imponer, entre otras, las siguientes limitaciones a las personas indicadas en el inciso anterior:

a) Una prohibición total y permanente de efectuar cualquiera de las operaciones indicadas en el inciso anterior.

b) Una prohibición transitoria, por períodos definidos por el directorio en atención a las actividades, eventos o procesos de la entidad, durante el cual deberán abstenerse de realizar cualquiera de las operaciones indicadas en el inciso anterior.

c) Una prohibición permanente de adquirir y enajenar, o de enajenar y posteriormente adquirir, los valores indicados en el inciso anterior, si entre tales operaciones no hubiere transcurrido a lo menos un plazo determinado de días hábiles bursátiles.

En los casos indicados en las letras anteriores, así como en los demás que pueda adoptar la política interna de cada entidad, se podrá establecer que la violación de la prohibición genere para el infractor, además de las responsabilidades funcionarias que correspondan, la obligación de pagar, a la entidad respectiva, una multa equivalente a un porcentaje de la operación o del monto total de la ganancia obtenida, o pérdida evitada, mediante las operaciones realizadas. La aplicación de esta multa no obstará a

la aplicación de las sanciones legales que sean procedentes cuando además se haya infringido la ley.

Será responsabilidad del directorio o administrador de cada entidad adoptar la política indicada en este artículo, la que, debidamente actualizada, deberá ser puesta en conocimiento del público en general, lo que podrá cumplirse mediante su publicación en el sitio en Internet de las entidades que cuenten con tales medios.

Artículo 17. Las personas indicadas en el artículo anterior deberán informar a cada una de las bolsas de valores del país en que el emisor tenga valores registrados para su cotización, su posición en valores del emisor y de las entidades del grupo empresarial de que dicho emisor forme parte, incluyendo aquellos que posean a través de entidades controladas por ellas, sea directa o indirectamente. Esta información deberá proporcionarse cuando las personas asuman su cargo o sean incorporadas al registro público indicado en el artículo 68, cuando abandonen el cargo o sean retiradas de dicho registro, así como cada vez que dicha posición se modifique en forma significativa.

Artículo 18. Las personas indicadas en el artículo 16 deberán, además, informar mensualmente y en forma reservada, al directorio o administrador del emisor, su posición en valores de los principales proveedores, clientes y competidores del giro de la entidad, incluyendo aquellos valores que posean a través de entidades controladas, directa o indirectamente, por ellas. El directorio o administrador del emisor será responsable de elaborar y mantener debidamente actualizado, un listado reservado que identifique a dichos principales proveedores, clientes y competidores del giro de la entidad.

Artículo 19. La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá establecer contenidos y criterios mínimos a los cuales deberá ajustarse la política a que se refiere el artículo 16, definirá casos que puedan eximirse de su aplicación y normas que faciliten el cálculo y la aplicación de la multa indicada en el artículo 16.

Asimismo, la Superintendencia determinará, mediante norma de carácter general, los criterios mínimos y las excepciones que se deberán considerar en la preparación y presentación de la información contemplada en los artículos 17 y 18, la que también deberá ser puesta a disposición de la Superintendencia en la oportunidad y forma que ésta establezca.

Artículo 20. Las sociedades anónimas abiertas informarán a la Superintendencia y a las bolsas de valores en que se transen sus acciones, las transacciones de sus acciones que efectúen sus personas

relacionadas, en la forma y con la periodicidad que determine la Superintendencia mediante norma de carácter general.”.

15) En la letra a) del artículo 23, intercálase entre la expresión “inscripción” y el punto seguido (.), la frase “, en la medida que se ajusten a las normas dictadas en conformidad con el artículo 44 letra e)” y agrégase la siguiente oración a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.): “El registro de las acciones en una bolsa de valores deberá solicitarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha de la inscripción de dichas acciones en el Registro de Valores.”.

16) Modifícase el artículo 33, de la siguiente forma:

a) Agrégase en el inciso primero, a continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), lo siguiente:

“Sin perjuicio de ello, los corredores de bolsa y agentes de valores deberán, además, definir, hacer pública y mantener debidamente actualizada, una política interna que regule los procedimientos, mecanismos de control y responsabilidades que les serán aplicables en el manejo de la información que obtuvieren de las decisiones de adquisición, aceptación o rechazo de ofertas específicas o venta de sus clientes, así como de cualquier estudio, análisis u otro antecedente que pueda incidir en la oferta o demanda de valores en cuya transacción participen. Esta política y sus modificaciones deberán ajustarse a la norma de carácter general que dicte la Superintendencia.”.

b) Modifícase el inciso segundo de la siguiente forma:

i) Intercálase, entre las palabras “sujeto a” y “los reglamentos”, la expresión “su política interna y a”.

ii) Intercálase, entre las palabras “respectiva” y “aprobados”, una coma (,).

17) Modifícase el artículo 54, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el inciso primero, entre las expresiones “toda persona” y “que, directa”, la frase “o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta” y reemplázanse las expresiones “que haga oferta pública de sus acciones” por la expresión “abierta”.

b) Modifícase el inciso segundo, de la siguiente forma:

i) Intercálase, entre las palabras “nacional” y el punto seguido (.), la frase “y en el sitio en Internet de las entidades que pretendan obtener el control, de disponer de tales medios”.

ii) Reemplázase la palabra “iniciado” por la expresión “formalizado”.

iii) Intercálase, entre las palabras “documentación” y “de esa”, la expresión “reservada”.

18) Reemplázanse en el artículo 54 A, las expresiones “que haga oferta pública de sus acciones” por la expresión “anónima abierta”.

19) Suprímese el párrafo segundo de la letra f) del artículo 59.

20) Suprímese el inciso final del artículo 60.

21) Sustitúyese el artículo 61 por los dos siguientes:

Artículo 61. El que con el objeto de inducir a error en el mercado de valores difunda información falsa o tendenciosa, aún cuando no persiga con ello obtener ventajas o beneficios para sí o terceros, sufrirá la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio.

La pena señalada en el inciso precedente se aumentará en un grado, cuando la conducta descrita la realice el que en razón de su cargo, posición, actividad o relación, en una entidad fiscalizada por la Superintendencia, posea o tenga acceso a información privilegiada.

Artículo 61 bis. En los delitos contemplados en los artículos 59, 60 y 61, además de las penas allí previstas, se podrá imponer la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, si el autor ha actuado prevaleciéndose de su condición profesional; o la de inhabilitación especial de cinco a diez años para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una sociedad o entidad sometida a fiscalización de la Superintendencia respectiva.

22) Modifícase el artículo 68, de la siguiente forma:

a) Modifícase el inciso primero, de la siguiente forma:

i) Intercálase, entre la expresión “efecto,” y “dichas”, la frase “será responsabilidad del directorio de”.

ii) Reemplázase la expresión “dentro del plazo de tercero día hábil de ocurrido el hecho deberán comunicarle todo nombramiento, vacancia o reemplazo que se produzca respecto de esos cargos” por la frase “entregar a la Superintendencia el listado de personas que integrarán el registro público y dar aviso de cualquier modificación que le afecte dentro del plazo de tercero día hábil de ocurrido el hecho”.

b) Modifícase el inciso segundo, de la siguiente forma:

i) Intercálase, entre la expresión “persona” y la expresión “que”, la expresión “natural”.

ii) Reemplázase, la frase “facultades relevantes de representación o decisión en la sociedad en materias propias del giro, independientemente de la denominación que se les otorgue” por la oración “la capacidad de planificar, dirigir o controlar la conducción superior de los negocios o la política estratégica de la entidad, ya sea por sí solo o junto con otros. En el desempeño de las actividades precedentemente señaladas no se atenderá a la calidad, forma o modalidad laboral o contractual bajo la cual el ejecutivo principal esté relacionado a la entidad, ni al título o denominación de su cargo o trabajo”.

23) Modifícase la letra a), del artículo 96 de la siguiente forma:

a) Sustitúyese la conjunción “y” por una coma (,).

b) Intercálase, entre la palabra “controlador” y el punto y coma (;), la expresión “y los miembros del grupo controlador”.

24) Modifícase la letra c), del artículo 100 de la siguiente forma:

a) Intercálase, entre las palabras “administradores” y “o liquidadores”, la expresión “, ejecutivos principales”.

b) Intercálase, entre la expresión “afinidad,” y la conjunción “y”, la frase “así como toda entidad controlada, directa o indirectamente, por cualquiera de ellos,”.

25) Modifícase el artículo 101, de la siguiente forma:

a) Suprímese el inciso segundo, pasando el actual inciso tercero, a ser inciso segundo.

b) Reemplázanse en el actual inciso tercero, que ha pasado a ser inciso segundo, las expresiones “los incisos precedentes” por las expresiones “el inciso precedente”.

26) Modifícase el inciso segundo del artículo 164, de la siguiente forma:

a) Sustitúyese la palabra “operaciones”, por la expresión “decisiones”.

b) Intercálase, entre las palabras “adquisición” y “o enajenación” las expresiones “, aceptación o rechazo de ofertas específicas”.

c) Intercálase, entre las palabras “institucional” y “en el” la frase “o controlador de una sociedad”.

27) Modifícase el artículo 165, de la siguiente forma:

a) Sustitúyese el inciso primero del artículo 165 por el siguiente:

“Cualquiera persona que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 166, o que en razón de su cargo, posición, actividad o relación con el respectivo emisor de valores o con las personas señaladas en el artículo siguiente, posea o tenga acceso a información privilegiada, deberá guardar estricta reserva y no podrá utilizarla en beneficio propio o ajeno, ni adquirir o enajenar, para sí o para terceros, directa o indirectamente, los valores sobre los cuales posea información privilegiada.”.

b) Modifícase el inciso tercero, de la siguiente forma:

i) Reemplázase la expresión “tengan” por la palabra “posean”.

ii) Reemplázase la expresión “corredor”, por la frase “intermediario, y la operación se ajuste a su política interna, establecida de conformidad al artículo 33”.

28) Reemplázase el artículo 166 por el siguiente:

“Artículo 166. Se presume que poseen información privilegiada las siguientes personas:

a) Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales y liquidadores del emisor o del inversionista institucional,

en su caso, así como las entidades controladas, directa o indirectamente, por ellos;

b) Las personas indicadas en la letra a) precedente, que se desempeñen en el controlador del emisor o del inversionista institucional, en su caso;

c) Las personas controladoras o sus representantes, que realicen operaciones o negociaciones tendientes a la enajenación del control, y

d) Los directores, gerentes, administradores, apoderados, ejecutivos principales, asesores financieros u operadores de intermediarios de valores, respecto de la información del inciso segundo del artículo 164 y de aquella relativa a la colocación de valores que les hubiere sido encomendada.

También se presume que tienen información privilegiada, en la medida que puedan tener acceso directo al hecho objeto de la información, las siguientes personas:

a) Los ejecutivos principales y dependientes de las empresas de auditoría externa del emisor o del inversionista institucional, en su caso;

b) Los socios, gerentes administradores y ejecutivos principales y miembros de los consejos de clasificación de las sociedades clasificadoras de riesgo, que clasifiquen valores del emisor o a este último;

c) Los dependientes que trabajen bajo la dirección o supervisión directa de los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores del emisor o del inversionista institucional, en su caso;

d) Las personas que presten servicios de asesorías permanente o temporal al emisor o inversionista institucional, en su caso, en la medida que la naturaleza de sus servicios les pueda permitir acceso a dicha información;

e) Los funcionarios públicos dependientes de las instituciones que fiscalicen a emisores de valores de oferta pública o a fondos autorizados por ley, y

f) Los cónyuges o convivientes de las personas señaladas en la letra a) del inciso primero, así como cualquier persona que habite en su mismo domicilio.”.

29) Sustitúyese el artículo 167 por el siguiente:

“Artículo 167. Las personas que en razón de su cargo o posición, posean, hayan tenido o tengan acceso a información privilegiada, obtenida directamente del emisor o inversionista institucional, en su caso, o a través de las personas indicadas en el artículo anterior, estarán obligadas a dar cumplimiento a las normas de este Título aunque hayan cesado en la relación o posición respectiva.”.

30) Intercálase en el inciso primero del artículo 168, entre las palabras “gerentes” y “u operadores”, así como entre las expresiones “gerentes” y “o liquidadores”, la expresión “, ejecutivos principales”.

31) Intercálase en el último inciso del artículo 169, entre las palabras “apoderados,” y “asesores”, la expresión “ejecutivos principales,”.

32) Intercálase en el inciso primero del artículo 170, entre las palabras “Título” y “, como también”, la expresión “y de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 33”.

33) Intercálase en el inciso primero del artículo 171, entre las palabras “valores” y “que”, las expresiones “de oferta pública” y elimínanse las expresiones “y los valores de las instituciones y entidades a que se refieren los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 3° de esta ley”.

34) Intercálanse en el artículo 179, los siguientes incisos tercero y cuarto, pasando los actuales incisos tercero y cuarto a ser incisos quinto y sexto:

“Las personas antes indicadas podrán ejercer el derecho a voto de los valores bajo su custodia, pero solamente cuando hayan recibido instrucciones expresas en que se identifique claramente la forma en que el dueño desea que sean votados y tal voto se realice de viva voz, dejando constancia de ello en el acta. Para ello, podrán dividir su voto incluso en situaciones distintas de las elecciones de directores y deberán indicar expresamente al votar cada una de las materias sometidas a consideración de los inversionistas, el número total de acciones propias por las que votan y el número total de acciones por cuenta de terceros que votan a favor, en contra o respecto de las que no recibieron instrucciones. Las instrucciones de los dueños deberán constar en un registro reservado, que contendrá la información y deberá conservarse por el tiempo que la Superintendencia determine mediante norma de carácter general.

Los valores que no puedan ser votados conforme a lo dispuesto en el inciso anterior se considerarán, no obstante, en el cálculo del

quórum de asistencia en el caso de entidades que no hayan adoptado mecanismos de votación a distancia autorizados por la Superintendencia.”.

35) Modifícase el artículo 198, de la siguiente forma:

a) Reemplázanse, en el inciso primero, las expresiones “que hagan oferta pública de sus acciones” por la expresión “abiertas”.

b) Reemplázanse, en el inciso segundo, las expresiones “que hagan oferta pública de sus acciones” por la expresión “abiertas”.

36) Modifícase el artículo 199, de la siguiente forma:

a) Reemplázanse, en el inciso primero, las expresiones “que haga oferta pública de las mismas” por la expresión “anónima abierta”.

b) En la letra a), intercálase entre las palabras “persona” y “tomar”, la frase “o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta”.

c) En la letra b), reemplázase la expresión “69 ter de la ley N°18.046” por las palabras “199 bis”.

d) En la letra c), intercálase entre las palabras “persona” y “pretende”, la expresión “o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta” y reemplázanse las expresiones “que haga oferta pública de sus acciones” por la expresión “sociedad anónima abierta”.

37) Agrégase el siguiente artículo 199 bis:

“Artículo 199 bis. Si como consecuencia de cualquier adquisición, una persona o grupo de personas con acuerdo de actuación conjunta alcanza o supera los dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto de una sociedad anónima abierta, deberá realizar una oferta pública de adquisición por las acciones restantes, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de aquella adquisición.

Dicha oferta deberá hacerse a un precio no inferior al que correspondería en caso de existir derecho a retiro.

De no efectuarse la oferta en el plazo señalado y sin perjuicio de las sanciones aplicables al incumplimiento, nacerá para el resto de los accionistas el derecho a retiro en los términos del artículo 69 de la ley N° 18.046. En este caso, se tomará como fecha de referencia para calcular el

valor a pagar, el día siguiente al vencimiento del plazo indicado en el inciso primero.

No regirá la obligación establecida en el inciso primero, cuando se alcance el porcentaje ahí referido como consecuencia de una reducción de pleno derecho del capital, por no haber sido totalmente suscrito y pagado un aumento dentro del plazo legal, o a causa de una oferta pública de adquisición de acciones válidamente efectuada por la totalidad de las acciones de la sociedad. Tampoco será aplicable en los casos en que el referido porcentaje se alcance a consecuencia de las operaciones indicadas en el inciso segundo del artículo 199.”.

38) Sustitúyese en el inciso primero del artículo 201, la frase “las hubieren vendido” por la frase “le hubieren vendido antes o en la oferta”.

39) Intercálase, en el inciso primero del artículo 203, entre la palabra “sociedades” y la expresión “que” las expresiones “anónimas abiertas” y suprimense las expresiones “y que hagan oferta pública de sus acciones”.

40) Intercálase en el inciso primero del artículo 205, entre las palabras “30 días” y el punto final (.) la frase “, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 206. Tanto el primero como el último día del plazo comenzarán y terminarán, respectivamente, a la apertura y cierre del mercado bursátil en que se encuentren registrados los valores de la oferta”.

41) Intercálase en el inciso segundo del artículo 206, entre las palabras “inicial” y el punto seguido (.) la frase “y tengan, al momento de ser publicadas, la misma fecha de vencimiento de la oferta con que compiten”.

42) Sustitúyese, en el artículo 217, la frase “Las sociedades anónimas que hagan oferta pública de sus valores estarán autorizadas” por la frase “Los emisores de valores de oferta pública estarán autorizados”.

43) Incorpórase el siguiente Título XXVIII, a continuación del artículo 238:

“TÍTULO XXVIII DE LAS EMPRESAS DE AUDITORÍA EXTERNA

Artículo 239. Para los efectos de esta ley, las empresas de auditoría externa son sociedades que, dirigidas por sus socios, prestan principalmente los siguientes servicios a sociedades anónimas abiertas y otras entidades regidas por esta ley:

a) Examinan, a base de pruebas, las evidencias que respaldan los importes y las informaciones contenidas en la contabilidad y los estados financieros de las entidades;

b) Evalúan los principios de contabilidad utilizados y la consistencia de su aplicación con los estándares relevantes, así como las estimaciones significativas hechas por la administración, y

c) Informan sus conclusiones respecto de la presentación general de la contabilidad y los estados financieros, indicando con un razonable grado de seguridad, si ellos están exentos de errores significativos y cumplen con los estándares relevantes en forma cabal, consistente y confiable.

Las referencias hechas en esta u otras leyes a auditores externos inscritos en el registro de la Superintendencia o a expresiones similares, deberán entenderse efectuadas a las empresas de auditoría externa que se encuentren inscritas en el Registro de Empresas de Auditoría Externa que llevará la Superintendencia de conformidad con el presente Título, en adelante el “Registro”.

Toda empresa de auditoría externa podrá prestar sus servicios a los emisores de valores y a las sociedades anónimas abiertas y especiales, siempre que ella, los socios que suscriban los informes de auditoría, los encargados de dirigir la auditoría y todos los miembros del equipo de auditoría, tengan independencia de juicio respecto de la entidad auditada y cumplan con las disposiciones de este título.

Artículo 240. Las empresas de auditoría externa quedarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia en lo referido a los servicios de auditoría externa, los que sólo podrán prestar cuando se encuentren inscritas en el Registro.

La Superintendencia deberá efectuar la inscripción en el Registro una vez que la empresa de auditoría externa acredite el cumplimiento de los requisitos legales y de reglamentación interna.

Las empresas de auditoría externa, al solicitar su inscripción en el Registro, deberán acompañar copia de su reglamento interno, en el que se establecerá, a lo menos, las siguientes materias relativas a la actividad de la empresa: (i) las políticas de procedimiento, control y análisis de auditoría; (ii) las políticas de confidencialidad, manejo de información privilegiada y solución de conflictos de intereses, y (iii) las políticas de independencia de juicio e idoneidad técnica del personal encargado de la dirección y ejecución de la auditoría externa. La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá normar los contenidos esenciales de dichas

políticas, los estándares mínimos de idoneidad técnica y sus formas de acreditación.

La inscripción a que se refieren los incisos anteriores podrá ser cancelada o suspendida hasta por el plazo de un año, cuando la Superintendencia así lo resuelva, mediante resolución fundada y previa audiencia de la empresa de auditoría externa afectada, por haber incurrido ésta en algunas de las siguientes causales:

a) Dejar de cumplir con alguno de los requisitos necesarios para la inscripción. La Superintendencia, en casos calificados, podrá otorgar al interesado un plazo para subsanar el incumplimiento, el que en ningún caso podrá exceder de 120 días;

b) Incurrir en infracciones graves o reiteradas a las obligaciones que le imponen esta ley, sus normas complementarias u otras disposiciones que los rijan;

c) Incurrir en forma culposa o dolosa en transacciones incompatibles con las sanas prácticas de los mercados de valores;

d) Dejar de desempeñar la función de auditoría externa, en los términos señalados en el artículo 239 de esta ley, por más de un año;

e) Incumplir obligaciones resultantes de auditorías relacionadas con transacciones de valores de emisores auditados por ellos, y

f) Encontrarse un socio en alguna de las situaciones señaladas en el artículo 241 y mantenerse en ella por más de noventa días.

Artículo 241. No podrán ser socios de una empresa de auditoría:

a) Quienes sean funcionarios o trabajadores bajo contrato de trabajo o a honorarios del Banco Central de Chile, de la Superintendencia y de las Superintendencias de Bancos e Instituciones Financieras y de Administradoras de Fondos de Pensiones, así como quienes se encuentren afectos a las inhabilidades y prohibiciones establecidas en los artículos 35 y 36 de la ley N° 18.046, exceptuando las labores docentes o académicas que puedan quedar incluidas en el N° 4 del citado artículo 35;

b) Quien haya sido sancionado grave o reiteradamente por la Superintendencia de conformidad al decreto ley N° 3.538, de 1980, o al decreto con fuerza de ley N° 251, del año 1931, del Ministerio de

Hacienda; o condenado de conformidad a los artículos 59 a 61 de esta ley o al artículo 134 de la ley N° 18.046;

c) Quien haya sido sancionado grave o reiteradamente por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras o por la Superintendencia de Pensiones;

d) Quien, al tiempo de ejecutarse los hechos, fuera controlador o administrador de una persona jurídica sancionada de conformidad a las normas citadas en las letras b) y c) precedentes, y

e) Los administradores de bancos e instituciones financieras, bolsas de valores, intermediarios de valores o de cualquier inversionista institucional y las personas que, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, posean el 5% o más de su capital.

Artículo 242. Las empresas de auditoría externa podrán desarrollar actividades distintas de las señaladas en el artículo 239, siempre que no comprometan su idoneidad técnica o independencia de juicio en la prestación de los servicios de auditoría externa, y previo cumplimiento de su reglamento interno.

Con todo, las empresas de auditoría externa no podrán prestar simultáneamente y respecto de una misma entidad de las indicadas en el inciso final del artículo 239, servicios de auditoría externa y cualquiera de los servicios indicados a continuación:

a) Auditoría interna;

b) Desarrollo o implementación de sistemas contables y de presentación de estados financieros;

c) Teneduría de libros;

d) Tasaciones, valorizaciones y servicios actuariales que impliquen el cálculo, estimación o análisis de hechos o factores de incidencia económica que sirvan para la determinación de montos de reservas, activos u obligaciones y que conlleven un registro contable en los estados financieros de la entidad auditada;

e) Asesoría para la colocación o intermediación de valores y agencia financiera. Para estos efectos, no se entenderán como asesoría aquellos servicios prestados por exigencia legal o regulatoria en relación con la información exigida para casos de oferta pública de valores;

f) Asesoría en la contratación y administración de personal y recursos humanos, y

g) Patrocinio o representación de la entidad auditada en cualquier tipo de gestión administrativa o procedimiento judicial y arbitral, excepto en juicios tributarios o aduaneros, cuando la primera instancia jurisdiccional se tramite ante el Servicio de Impuestos Internos o el Servicio de Aduanas, y siempre que la cuantía del conjunto de dichos procedimientos no exceda del 5 por ciento del patrimonio contable de la entidad auditada. Las personas que presten tales servicios no podrán intervenir en la auditoría externa de la entidad auditada. Con todo, lo dispuesto en este literal no impedirá que la empresa de auditoría externa pueda declarar en juicio y proveer explicaciones relativas a materias de hecho, correspondientes a los servicios prestados a la entidad, los criterios utilizados o a la manera en que llegó a sus conclusiones.

En las sociedades anónimas abiertas, solamente cuando así lo acuerde el directorio, previo informe del comité de directores, de haberlo, se permitirá la contratación de la empresa de auditoría externa para la prestación de servicios que, no estando incluidos en el listado anterior, no formen parte de la auditoría externa.

Artículo 243. Se presume que carecen de independencia de juicio respecto de una sociedad auditada, las siguientes personas naturales que participen de la auditoría externa:

a) Las relacionadas con la entidad auditada en los términos establecidos en el artículo 100;

b) Las que tengan algún vínculo de subordinación o dependencia, o quienes presten servicios a la entidad auditada o a cualquier otra de su grupo empresarial;

c) Las que posean valores emitidos por la entidad auditada o por cualquier otra entidad de su grupo empresarial o valores cuyo precio o resultado dependa o esté condicionado, en todo o en parte significativa, a la variación o evolución del precio de dichos valores. Se considerará para los efectos de esta letra, los valores que posea el cónyuge y también las promesas, opciones y los que haya recibido éste en garantía;

d) Los trabajadores de un intermediario de valores con contrato vigente de colocación de títulos de la entidad auditada y las personas relacionadas de aquél;

e) Las que tengan o hayan tenido durante los últimos doce meses una relación laboral o relación de negocios significativa con la entidad auditada o con alguna de las entidades de su grupo empresarial, distinta de la auditoría externa misma o de las otras actividades realizadas por la empresa de auditoría externa de conformidad con la presente ley, y

f) Los socios de la empresa de auditoría externa, cuando conduzcan la auditoría de la entidad por un período que exceda de 5 años consecutivos.

Artículo 244. Se entenderá que una empresa de auditoría externa no tiene independencia de juicio respecto de una entidad auditada en los siguientes casos:

a) Si tiene, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, una significativa relación contractual o crediticia, activa o pasiva, con la entidad auditada o con alguna de las entidades de su grupo empresarial, distinta de la auditoría externa propiamente tal o de las demás actividades permitidas de conformidad al artículo 242;

b) Si, en forma directa o a través de otras entidades, posee valores emitidos por la entidad auditada o por cualquier otra entidad de su grupo empresarial, o

c) Si 25% o más de sus ingresos operacionales anuales, sumados a los de sus filiales y matrices, provienen del mismo grupo empresarial al que pertenece la entidad auditada. Esta causal de falta de independencia será aplicable solamente respecto de una entidad de las indicadas en el inciso final del artículo 239 y a contar del tercer año de inscrita la empresa de auditoría externa en el Registro.

Artículo 245. En el evento que exista o sobrevenga una causal de falta de independencia de juicio de las que se describen en los artículos precedentes, la empresa de auditoría externa deberá informar de ello al directorio o al órgano de administración de la entidad auditada y no podrá prestar o continuar prestando sus servicios de auditoría externa, salvo en las siguientes circunstancias:

a) En los casos del artículo 243, cuando las personas afectadas sean separadas del equipo de auditoría y se apliquen medidas correctivas que aseguren el reestablecimiento de la independencia de juicio respecto de la sociedad auditada, o

b) En caso que sobrevenga alguna de las causales relativas a falta de independencia del artículo 244, la empresa de auditoría externa podrá seguir prestando los servicios contratados para el ejercicio en curso.

Artículo 246. A las empresas de auditoría externa les corresponde especialmente examinar y expresar su opinión profesional e independiente sobre la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros conforme a las Normas de Auditoría de General Aceptación y las

instrucciones que imparta la Superintendencia, en su caso. Adicionalmente a lo señalado en el artículo 239, las empresas de auditoría externa deberán:

a) Señalar a la administración de la entidad auditada y al comité de directores, en su caso, las deficiencias que se detecten dentro del desarrollo de la auditoría externa en la adopción y mantenimiento de prácticas contables, sistemas administrativos y de auditoría interna, identificar las discrepancias entre los criterios contables aplicados en los estados financieros y los criterios relevantes aplicados generalmente en la industria en que dicha entidad desarrolla su actividad, así como, en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la sociedad y la de sus filiales incluidas en la respectiva auditoría;

b) Comunicar a los organismos supervisores pertinentes, cualquier deficiencia grave a que se refiere el literal anterior y que, a juicio de la empresa auditora, no haya sido solucionada oportunamente por la administración de la entidad auditada, en cuanto pueda afectar la adecuada presentación de la posición financiera o de los resultados de las operaciones de la entidad auditada, y

c) Informar a la entidad auditada, dentro de los dos primeros meses de cada año, si los ingresos obtenidos de ella, por si sola o junto a las demás entidades del grupo al que ella pertenece, cualquiera sea el concepto por el cual se hayan recibido tales ingresos, e incluyendo en dicho cálculo aquellos obtenidos a través de sus filiales y matriz, superan el 10% del total de ingresos operacionales de la empresa de auditoría externa correspondientes al año anterior.

Artículo 247. Sólo para los fines de la auditoría externa, la entidad auditada deberá poner a disposición de la empresa de auditoría externa toda la información necesaria para efectuar dicho servicio, incluyendo todos los libros, registros, documentos y antecedentes de la entidad y de sus filiales, en su caso.

En caso que la información puesta a su disposición sea confidencial o sujeta a reserva, la empresa de auditoría externa deberá mantenerla en secreto y será responsable de la revelación o utilización impropia que sus dependientes hagan respecto de ella.

Artículo 248. Toda opinión, certificación, informe o dictamen de la empresa de auditoría externa deberá fundarse en técnicas y procedimientos de auditoría que otorguen un grado razonable de confiabilidad, proporcionen elementos de juicio suficientes, y su contenido sea veraz, completo y objetivo.

La empresa de auditoría externa deberá mantener, por a lo menos seis años contados desde la fecha de la emisión de tales

opiniones, certificaciones, informes o dictámenes, todos los antecedentes que le sirvieron de base para su elaboración. La Superintendencia, mediante una norma de carácter general, podrá establecer medios y condiciones de archivo y custodia de tales antecedentes. En ningún caso podrán destruirse los documentos que digan relación directa o indirecta con alguna controversia o litigio pendiente.

El informe de auditoría externa de las entidades domiciliadas en Chile deberá ser suscrito a lo menos por el socio con domicilio y residencia en Chile que condujo la auditoría. Cuando sean citados, cualquiera que haya firmado los informes de auditoría deberá concurrir a las juntas de accionistas para responder las consultas que se le formulen respecto de su informe y respecto de las actividades, procedimientos, constataciones, recomendaciones y conclusiones, que sean pertinentes. La Superintendencia podrá autorizar mecanismos que permitan cumplir la obligación antedicha por medios de comunicación que garanticen la fidelidad y simultaneidad de sus opiniones.

Artículo 249. Las empresas de auditoría externa, en la prestación de sus servicios de auditoría externa, y las personas que en su nombre participen en dicha auditoría, responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren.”.

ARTÍCULO 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley Nº 18.046, Ley de Sociedades Anónimas:

1) Sustitúyese el artículo 2º, por el siguiente:

“Artículo 2º. Las sociedades anónimas pueden ser de tres clases: abiertas, especiales o cerradas.

Son sociedades anónimas abiertas aquéllas que inscriban voluntariamente o por obligación legal sus acciones en el Registro de Valores.

Son sociedades anónimas especiales las indicadas en el Título XIII de esta ley.

Son sociedades anónimas cerradas las que no califican como abiertas o especiales.

Las sociedades anónimas abiertas y las sociedades anónimas especiales, quedarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, en adelante la Superintendencia, o de otra Superintendencia que determine la ley.

Las sociedades anónimas que dejen de cumplir las condiciones para estar obligadas a inscribir sus acciones en el Registro de Valores, continuarán afectas a las normas que las rigen, mientras la junta extraordinaria de accionistas no acordare lo contrario por los dos tercios de las acciones con derecho a voto. En este caso, el accionista ausente o disidente tendrá derecho a retiro.

Cada vez que las leyes establezcan como requisito que una sociedad se someta a las normas de las sociedades anónimas abiertas o que dichas normas le sean aplicables, o se haga referencia a las sociedades sometidas a la fiscalización, al control o a la vigilancia de la Superintendencia, o se empleen otras expresiones análogas, se entenderá, salvo mención expresa en contrario, que la remisión es a las entidades informantes referidas en el artículo 7° de la Ley de Mercado de Valores y a las normas aplicables a las sociedades anónimas abiertas relativas exclusivamente a las obligaciones de información y publicidad para con los accionistas, la Superintendencia y el público en general. En todo lo demás, se regirán por las disposiciones de las sociedades anónimas cerradas o especiales, según corresponda. Salvo que fueren emisores de valores de oferta pública, las entidades informantes antes referidas no tendrán la obligación de inscribirse en el Registro de Valores.

Las disposiciones de la presente ley primarán sobre las de los estatutos de las sociedades que dejen de ser cerradas, por haber cumplido con algunos de los requisitos establecidos en el inciso segundo del presente artículo. Lo anterior es sin perjuicio de la obligación de estas sociedades de adecuar sus estatutos a las normas de la presente ley, conjuntamente con la primera modificación que en ellos se introduzca.”.

2) Elimínase en el inciso segundo, del artículo 3°, la expresión “generales”.

3) Modifícase el artículo 4°, de la siguiente forma:

a) Elimínase en el número 1), la expresión “, profesión”.

b) Reemplázase en el número 5), la expresión “privilegios” por la expresión “preferencias”.

c) Intercálase, en el número 7), entre la expresión “accionistas” y el punto y coma (;), las siguientes expresiones: “. Si nada se dijere, se entenderá que el ejercicio se cierra al 31 de diciembre y que la junta ordinaria de accionistas debe celebrarse en el primer cuatrimestre de cada año”.

4) Elimínase en el número 1), del artículo 5°, la expresión “, profesión” y en el número 3) del mismo artículo, reemplázase la expresión “privilegios” por la expresión “preferencias”.

5) Elimínase en el inciso segundo del artículo 5° A, la expresión “general”.

6) Modifícase el artículo 7°, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el primer inciso, entre las palabras “sucursales” y “a disposición”, la expresión “, así como en su sitio en Internet, en el caso de las sociedades anónimas que dispongan de tales medios,”.

b) Intercálase el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando el actual inciso segundo a ser inciso tercero:

“Es de responsabilidad del directorio la custodia de los libros y registros sociales, así como que éstos sean llevados con la vigencia y regularidad exigida por la ley y sus normas complementarias. El directorio podrá delegar esta función, de lo que deberá dejarse constancia en actas.”.

c) Reemplázase, en el que ha pasado a ser inciso tercero, la expresión “el inciso precedente” por la expresión “el inciso primero”.

7) Modifícase el artículo 12, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el tercer inciso, entre las palabras “sociedades” y “abiertas”, la expresión “anónimas”.

b) Sustitúyese en el inciso final, las expresiones “sometidas a su control” por las expresiones “anónimas abiertas”.

8) Modifícase el artículo 14, de la siguiente forma:

a) Sustitúyese el inciso primero por el siguiente:

“Solamente en las sociedades anónimas cerradas, los estatutos podrán estipular disposiciones que limiten la libre disposición de las acciones.”.

b) Sustitúyese en el inciso segundo, las expresiones “se tendrán por no escritos” por las expresiones “serán inoponibles a la sociedad y a terceros”.

9) Modifícase el artículo 16, de la siguiente forma:

a) Intercálase el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando el actual inciso tercero a ser inciso cuarto:

“Los pagos parciales del saldo insoluto de las acciones suscritas y no pagadas, se abonarán a las respectivas acciones impagas de acuerdo a su antigüedad de emisión, de una en una, hasta completar el pago de la totalidad de ellas.”.

b) Intercálase, en el actual inciso tercero que ha pasado a ser inciso cuarto, entre las palabras “pagado” y “gozarán”, la expresión “no tendrán derecho a voto, pero”.

10) Modifícase el artículo 20, de la siguiente forma:

a) En el inciso segundo, sustitúyense las expresiones “que hagan oferta pública de sus acciones” por la palabra “abiertas”.

b) En el inciso segundo, elimínase la expresión “o privilegios”.

11) Modifícase el artículo 24, de la siguiente forma:

a) Sustitúyese la oración final del inciso primero, por la siguiente: “Vencido el plazo establecido por la junta de accionistas sin que se haya enterado el aumento de capital, el directorio podrá optar porque éste quede reducido a la cantidad efectivamente pagada o continuar con los procedimientos de cobro del saldo insoluto de las acciones suscritas y no pagadas.”.

b) Modifícase el inciso tercero, de la siguiente forma:

i) Elimínase la palabra “abierta”.

ii) Agrégase, al final, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración: “Las acciones destinadas a los planes de compensación mencionados sólo podrán ser ofrecidas a los trabajadores a prorrata de la cantidad de acciones del respectivo aumento de capital, en la parte no reservada para tales fines, que sean efectivamente suscritas y pagadas.”.

iii) Suprímese el actual inciso cuarto.

12) Modifícase el inciso segundo del artículo 26, de la siguiente forma:

a) Reemplázase la expresión “nominal si lo tuvieran,” por la oración “que resulte de dividir el capital a enterar por el número de acciones a emitir,”.

b) Reemplázase la expresión “pérdida en los resultados sociales” por las expresiones “una disminución del capital a enterar. Vencido el plazo para el entero del aumento de capital, el mayor valor aumentará de pleno derecho el capital de la sociedad”.

13) Reemplázase en el inciso segundo del artículo 27 A, la expresión “tres” por la palabra “cinco”.

14) Modifícase el artículo 27 C, de la siguiente forma:

a) Modifícase el inciso segundo, de la siguiente forma:

i) Reemplázase la frase “se trate de cumplir un programa o plan de compensación a trabajadores de la sociedad, o respecto de la venta de una cantidad de acciones que” por la oración “la cantidad total de acciones a ser vendidas”.

ii) Elimínase la frase “en ambos casos se”.

b) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“El plazo previsto en el inciso primero será de 5 años cuando las acciones se hayan adquirido para cumplir un programa o plan de compensación a trabajadores de la sociedad aprobado por la junta de accionistas, caso en el cual tampoco será obligatoria la oferta preferente a los accionistas.”.

15) Modifícase el artículo 28, de la siguiente forma:

a) Reemplázase en el inciso primero, la expresión “treinta” por el guarismo “15”.

b) Intercálase en el inciso segundo, entre las palabras “nacional” y “, en el que”, la frase “y en el sitio en Internet de las sociedades anónimas abiertas que dispongan de tales medios”.

16) Reemplázase en el artículo 29, la expresión “73” por “76”.

17) Intercálase en el último inciso del artículo 31, entre las palabras “debiere” y “constituir”, la expresión “designar los directores independientes y”.

18) Agrégase en el inciso final del artículo 32, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:

“En el caso que la referida vacancia corresponda a uno de los directores independientes a que se refiere el artículo 50 bis y su suplente, en su caso, el directorio deberá citar a junta de accionistas para proceder a la renovación total del directorio dentro del plazo máximo de sesenta días contados desde la vacancia.”.

19) Modifícase el artículo 36, de la siguiente forma:

a) En el número 1), reemplázase la expresión “y diputados”, por la expresión “, diputados y alcaldes”.

b) En el número 2), reemplázase las expresiones “y subsecretarios de Estado”, por las expresiones “de Estado, subsecretarios, intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales y embajadores”.

c) Reemplázanse los números 3) y 4), por los siguientes:

“3) Los funcionarios de las Superintendencias que supervisen a la sociedad respectiva o sobre una o más de las sociedades a que el grupo pertenece, y

4) Los corredores de bolsa y los agentes de valores, así como sus directores, gerentes, ejecutivos principales y administradores. Esta restricción no se aplicará en las bolsas de valores.”.

20) Reemplázase el inciso segundo del artículo 37, por el siguiente:

“El director que adquiriera una calidad que lo inhabilite para desempeñar dicho cargo o que incurriera en incapacidad legal sobreviniente, cesará automáticamente en él. De igual forma cesará en su cargo aquel director que notifique su renuncia indeclinable, mediante ministro de fe, al presidente del directorio.”.

21) Agrégase al artículo 39, el siguiente inciso final, nuevo:

“No obstante lo dispuesto en el inciso primero, en las sociedades anónimas cerradas el directorio podrá también actuar válidamente a través de acuerdos adoptados fuera de sesiones, los que deberán constar en escrituras públicas firmadas por todos sus miembros titulares. Para ser oponibles respecto de terceros, deberá dejarse constancia de estas escrituras en el libro de actas del directorio, bajo la responsabilidad del presidente, o de quien haga sus veces, y del secretario del directorio, quienes deberán velar por el respeto de lo establecido en el artículo 92.”.

22) Modifícase el artículo 40, de la siguiente forma:

a) Elimínase en el inciso primero, la palabra “general”.

b) Intercálase en el inciso segundo, entre las palabras “en los” y “gerentes”, la expresión “ejecutivos principales,”.

23) En el artículo 41 inciso tercero, elimínase la palabra “general” la primera vez que aparece.

24) Modifícase el artículo 42, de la siguiente forma:

a) Elimínase en el número 1), la expresión “, sino sus propios intereses o los de terceros relacionados”;

b) Modifícase el número 2), de la siguiente forma:

i) Intercálase, entre las palabras “de los” y “ejecutivos”, la expresión “gerentes, administradores o”.

ii) Intercálase, entre las palabras “ejecutivos” y “en la”, la expresión “principales”.

c) Modifícase el número 3) de la siguiente forma:

i) Reemplázase la expresión “ejecutivos y dependientes” por la frase “administradores, ejecutivos principales y dependientes,”.

ii) Intercálase, entre las palabras “auditores” y “, a rendir”, la expresión “externos y a las clasificadoras de riesgo”.

25) Agrégase en el inciso final del artículo 43, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración:

“En el caso de las sociedades anónimas abiertas, esta divulgación se hará de acuerdo al artículo 10 de la ley N° 18.045.”.

26) Reemplázase el artículo 44, por el siguiente:

“Artículo 44. A menos que los estatutos establezcan algo distinto, una sociedad anónima cerrada sólo podrá celebrar actos o contratos que involucren montos relevantes en los que uno o más directores tengan interés por sí o como representantes de otra persona, cuando dichas operaciones sean conocidas y aprobadas previamente por el directorio y se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen en el mercado.

El directorio deberá pronunciarse con la abstención del director con interés. En el acta de la sesión de directorio correspondiente, deberá dejarse constancia de las deliberaciones para aprobar los términos y condiciones de los respectivos actos o contratos, y tales acuerdos serán informados en la próxima junta de accionistas por el que la presida, debiendo hacerse mención de esta materia en su citación. Se presume de derecho que existe interés de un director en toda negociación, acto, contrato u operación en la que deba intervenir en cualquiera de las siguientes situaciones: (i) él mismo, su cónyuge o sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad; (ii) las sociedades o empresas en las cuales sea director o dueño, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital; (iii) las sociedades o empresas en las cuales alguna de las personas antes mencionadas sea director o dueño, directo o indirecto, del 10% o más de su capital, y (iv) el controlador de la sociedad o sus personas relacionadas, si el director no hubiera resultado electo sin los votos de aquél o aquéllos.

Para los efectos de este artículo, se entiende que es de monto relevante todo acto o contrato que supere el 1% del patrimonio social, siempre que dicho acto o contrato exceda el equivalente a 2.000 unidades de fomento y, en todo caso, cuando sea superior a 20.000 unidades de fomento. Se presume que constituyen una sola operación todas aquellas que se perfeccionen en un período de 12 meses consecutivos por medio de uno o más actos similares o complementarios, en los que exista identidad de partes, incluidas las personas relacionadas, u objeto.

La infracción a este artículo no afectará la validez de la operación y sin perjuicio de las sanciones que correspondan, otorgará a la sociedad, a los accionistas y a los terceros interesados, el derecho de exigir indemnización por los perjuicios ocasionados. En caso de demandarse los perjuicios ocasionados por la infracción de este artículo, corresponderá a la parte demandada probar que el acto o contrato se ajustó a condiciones de mercado o que las condiciones de negociación reportaron beneficios a la sociedad que justifican su realización.

Con todo, no será aplicable lo establecido en el inciso primero si la operación ha sido aprobada o ratificada por la junta extraordinaria de accionistas con el quórum de 2/3 de la junta.

En el caso de las sociedades anónimas abiertas, se aplicará lo dispuesto en el Título XVI.”.

27) Intercálase en el artículo 46, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En las sociedades anónimas abiertas, será responsabilidad del directorio que la información referida en el inciso anterior no sea divulgada a una o más personas distintas de aquellas que por su cargo, posición o actividad en la sociedad deban conocer dicha información, antes de ser puesta a disposición de los accionistas y el público. Se entenderá que se cumple con este requisito cuando simultáneamente a dicha divulgación se proporcione la misma documentación o presentaciones al público conforme a la norma de carácter general que dicte la Superintendencia. La obligación de informar prescrita en este inciso, es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 9° y 10 de la ley N° 18.045.

28) Suprímese en el inciso primero del artículo 47, la palabra “titulares”.

29) Modifícase el artículo 48, de la siguiente forma:

a) Agrégase en el inciso tercero, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:

“Con todo, la unanimidad de los directores que concurrieron a una sesión podrá disponer que los acuerdos adoptados en ella se lleven a efecto sin esperar la aprobación del acta, de lo cual se dejará constancia en un documento firmado por todos ellos que contenga el acuerdo suscrito.”.

b) Agrégase en el inciso quinto, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:

“Salvo acuerdo unánime, las sesiones de directorio de las sociedades anónimas abiertas deberán ser grabadas, por quien haga las veces de secretario, en medios que permitan registrar fielmente el audio de las deliberaciones. Dichas grabaciones deberán ser guardadas en reserva por la sociedad, hasta la aprobación del acta respectiva por todos los directores que deban firmarla, y puestas a disposición de los directores que deseen comprobar la fidelidad de las actas sometidas a su aprobación. En caso que un director estime que existen discrepancias fundamentales y substanciales entre

el contenido de las actas y el de las grabaciones, podrá solicitar que a ellas se incorporen, palabra por palabra, el contenido de las grabaciones en los pasajes respectivos. El presidente podrá someter dicha solicitud a la resolución de una reunión de directorio extraordinaria, si estima que las discrepancias no son fundamentales y substanciales.”.

c) Agrégase en el inciso final, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:

“La Superintendencia podrá autorizar, mediante norma de carácter general, que las sociedades bajo su control adopten para tales fines los mecanismos que permitan el uso de firma electrónica u otros medios tecnológicos que permitan comprobar la identidad de la persona que suscribe.”.

30) Suprímese el actual inciso final del artículo 50.

31) Reemplázase el actual artículo 50 bis, por el siguiente:

“Artículo 50 bis. Las sociedades anónimas abiertas deberán designar los directores independientes y el comité de directores a que se refiere este artículo, cuando tengan un patrimonio bursátil igual o superior al equivalente a 1.000.000 de unidades de fomento y a lo menos un 12,5% de sus acciones emitidas con derecho a voto, se encuentren en poder de accionistas que individualmente controlen o posean menos del 10% de tales acciones.

Si durante el año se alcanzare el patrimonio y el porcentaje accionario a que se refiere el inciso anterior, la sociedad estará obligada a designar los directores y el comité a contar del año siguiente; si se produjere una disminución del patrimonio bursátil a un monto inferior al indicado o se redujere el porcentaje accionario antes referido, la sociedad no estará obligada a mantener los directores ni el comité a contar del año siguiente.

El directorio deberá estar integrado por a lo menos un director independiente.

Se considerará independiente para estos efectos a quien no mantiene alguna relación con la sociedad, las demás sociedades del grupo del que ella forma parte, su controlador, ni con los ejecutivos principales de cualquiera de ellos, que pueda privar a una persona sensata de un grado razonable de autonomía, interferir con sus posibilidades de realizar un trabajo objetivo y efectivo, generarle un potencial conflicto de interés o entorpecer su independencia de juicio.

Asimismo, se presumirá que no son independientes aquellas personas que en cualquier momento dentro de los últimos dieciocho meses estuvieron en alguna de las siguientes circunstancias:

1) Mantuvieron cualquier vinculación, interés o dependencia económica, profesional, crediticia o comercial, de una naturaleza y volumen relevante, con las personas indicadas en el inciso anterior;

2) Mantuvieron una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, con las personas indicadas en el inciso anterior;

3) Hubiesen sido directores, gerentes, administradores o ejecutivos principales de organizaciones sin fines de lucro que hayan recibido aportes, contribuciones o donaciones relevantes de las personas indicadas en el inciso anterior;

4) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital; directores; gerentes; administradores o ejecutivos principales de entidades que han prestado servicios jurídicos o de consultoría, por montos relevantes, o de auditoría externa, a las personas indicadas en el inciso anterior, o

5) Hubiesen sido socios o accionistas que hayan poseído o controlado, directa o indirectamente, 10% o más del capital; directores; gerentes; administradores o ejecutivos principales de los principales competidores, proveedores o clientes de la sociedad.

La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá establecer criterios que complementen la calificación de independencia o falta de ella, de conformidad a los numerales del inciso anterior.

Para poder ser elegidos como directores independientes, los candidatos deberán ser propuestos por accionistas que representen el 1% o más de las acciones de la sociedad, con a lo menos diez días de anticipación a la fecha prevista para la junta de accionistas llamada a efectuar la elección de los directores. Con no menos de dos días de anterioridad a la junta respectiva, el candidato y su respectivo suplente, en su caso, deberán poner a disposición del gerente general una declaración jurada en que señalen que aceptan ser candidato a director independiente, que cumplen con los requisitos de independencia antes indicados y que asumen el compromiso de mantenerse independientes por todo el tiempo en que ejerzan el cargo de director, bajo responsabilidad de responder de los perjuicios que su incumplimiento pueda causar a los accionistas. En caso que una persona no cumpla con alguno de los criterios de independencia indicados en el inciso quinto, podrá igualmente ser candidato si identifica explícitamente y con

claridad en su declaración la o las relaciones concretas que configuran tal circunstancia.

El directorio de la sociedad deberá proponer a la junta de accionistas el rechazo de determinados candidatos, fundadamente e indicando las causales específicas, cuando tenga conocimiento de situaciones que comprometan su independencia que no hayan sido incluidas en la declaración jurada del candidato. Los directores responderán personalmente de los perjuicios que causen a la sociedad o sus accionistas si, conociendo tales situaciones, omitan darlas a conocer en el directorio que deba pronunciarse acerca de los candidatos.

Serán elegidos como directores independientes aquellos candidatos que, cumpliendo los requisitos anteriores, obtengan una votación tal que, al sustraer de ella los votos provenientes del controlador y de sus personas relacionadas, hubiesen resultado igualmente electos.

El director independiente que adquiera una inhabilidad sobreviniente para desempeñar dicho cargo cesará automáticamente en él, sin perjuicio de su responsabilidad frente a los accionistas. No se considerará inhabilidad sobreviviente aquella circunstancia descrita en el inciso quinto que haya sido dada a conocer por el director en su declaración jurada en conformidad al inciso séptimo. Tampoco se considerará inhabilidad sobreviniente la designación del director independiente como director en una o más filiales de la sociedad, en cuanto los directores de dichas entidades no sean remunerados.

El comité tendrá las siguientes facultades y deberes:

1) Examinar los informes de los auditores externos, el balance y demás estados financieros presentados por los administradores o liquidadores de la sociedad a los accionistas y pronunciarse respecto de éstos en forma previa a su presentación a los accionistas para su aprobación. Asimismo, deberá informar al directorio, en forma previa a la aprobación de los estados financieros que se presentarán a los accionistas, respecto de cualquier cambio relevante en los criterios contables aplicados durante el periodo correspondiente, respecto de las discrepancias entre los criterios contables aplicados en los estados financieros y los criterios relevantes aplicados generalmente en la industria en que dicha sociedad desarrolla su actividad, así como, respecto a las observaciones sobre los mecanismos de control interno y ajustes contables formuladas por la empresa de auditoría externa.

2) Proponer al directorio, los auditores externos y los clasificadores privados de riesgo, en su caso, que serán sugeridos a la junta de accionistas respectiva, así como los principales objetivos, criterios y alcances de su encargo. En caso de desacuerdo con el comité, el directorio

podrá formular una sugerencia propia, sometiéndose ambas a consideración de la junta de accionistas.

3) Examinar los antecedentes relativos a las operaciones a que se refiere el Título XVI y evacuar un informe respecto a esas operaciones.

Una copia del informe será enviada al presidente del directorio, quien deberá dar lectura a éste en la sesión citada para la aprobación o rechazo de la operación respectiva.

4) Examinar los sistemas de remuneraciones y planes de compensación de los directores, gerentes y ejecutivos principales. En caso de desacuerdo con el comité, el directorio podrá formular una sugerencia propia, sometiéndose ambas a consideración de la junta de accionistas.

5) Proponer al directorio una política que contemple criterios y procesos de evaluación del desempeño del directorio.

6) Proponer al directorio que determinadas materias sean incluidas en la tabla de las sesiones del directorio, así como una política que defina criterios de forma y anticipación mínima para la entrega de la información relevante a los directores en forma previa a las sesiones.

7) Preparar un informe anual de su gestión, en que se incluyan sus principales recomendaciones a los accionistas para mejorar el gobierno de la sociedad, que será presentado a los accionistas en la memoria de la sociedad.

8) Proponer al directorio la renovación o reemplazo de la empresa de auditoría externa que haya dado a la sociedad el aviso que señala el artículo 246 letra c) de la ley N° 18.045, así como respecto de la conveniencia de contratar o no a la empresa de auditoría externa para la prestación de servicios que no formen parte de la auditoría externa, cuando ellos no se encuentren prohibidos de conformidad a lo establecido en el artículo 242 de la mencionada ley, en atención a si la naturaleza de tales servicios pueda generar un riesgo de pérdida de independencia.

9) Las demás materias que señale el estatuto social, o que le encomiende una junta de accionistas o el directorio, en su caso.

El comité estará integrado por 3 miembros, la mayoría de los cuales deberán ser independientes al controlador. En caso que hubiere más directores con derecho a integrar el comité, según corresponda, en la primera reunión del directorio después de la junta de accionistas en que se haya efectuado su elección, los mismos directores resolverán, por

unanimidad, quiénes lo habrán de integrar. En caso de desacuerdo, se dará preferencia a la integración del comité por aquellos directores que hubiesen sido electos con un mayor porcentaje de votación, sin considerar los votos del controlador y de sus personas relacionadas.

En caso de haber solamente un director independiente en la sociedad, sólo él podrá integrar el comité con derecho a voto. Con todo, los directores que integren el comité deberán siempre dejar constancia en actas de su opinión, respecto de las materias sometidas a votación.

Si las labores del comité son delegadas en subcomités, la integración de dichos comités se regirá por lo dispuesto en los incisos anteriores. El presidente del directorio no podrá integrar el comité ni sus subcomités, salvo que sea director independiente.

Las deliberaciones, acuerdos y organización del comité se regirán, en todo lo que les fuere aplicable, por las normas relativas a las sesiones de directorio de la sociedad. El comité comunicará al directorio la forma en que solicitará información, así como también sus acuerdos.

Los directores integrantes del comité serán remunerados. El monto de la remuneración será fijado anualmente en la junta ordinaria de accionistas, acorde a las funciones que les corresponde desarrollar, pero no podrá ser inferior a la remuneración prevista para los directores titulares, más la mitad de la diferencia entre esa suma y la remuneración del presidente del directorio.

La junta ordinaria de accionistas determinará un presupuesto de gastos de funcionamiento del comité y sus asesores, el que no podrá ser inferior a la suma de las remuneraciones anuales de los miembros del comité, y éste podrá requerir la contratación de la asesoría de profesionales para el desarrollo de sus labores, conforme al referido presupuesto.

Las actividades que desarrolle el comité, su informe de gestión anual y los gastos en que incurra, incluidos los de sus asesores, serán presentados en la memoria anual e informados en la junta ordinaria de accionistas. Las propuestas efectuadas por el comité al directorio que no hubieren sido recogidas por este último, serán informadas a la junta de accionistas previo a la votación de la materia correspondiente.

Los directores que integren el comité en el ejercicio de las funciones que señala este artículo, además de la responsabilidad inherente al cargo de director, responderán solidariamente de los perjuicios que causen a los accionistas y a la sociedad.

Las sociedades anónimas abiertas que no tengan el patrimonio mínimo y porcentaje accionario señalados en el inciso primero, podrán acogerse voluntariamente a las normas precedentes; en ese caso, deberán cumplir estrictamente con las disposiciones de este artículo.”.

32) Modifícase el artículo 51, de la siguiente forma:

- a) Sustitúyese la palabra “deberán” por “podrán”.
- b) Intercálase, entre la palabra “independientes” y “con el”, una coma (,).

33) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 52, la expresión “auditores externos independientes” por la frase “una empresa de auditoría externa regida por el Título XXVIII de la ley N° 18.045”.

34) Reemplázase el actual artículo 53, por el siguiente:

“Art. 53. El Reglamento determinará los requisitos, derechos, obligaciones, funciones y demás atribuciones relativas a los auditores externos e inspectores de cuentas.

El informe de los auditores externos e inspectores de cuentas será incorporado en la memoria junto con los estados financieros y éstos podrán concurrir a las juntas generales de accionistas con derecho a voz pero sin derecho a voto.

Los auditores externos e inspectores de cuenta responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios que causaren.”.

35) Agrégase al artículo 54, el siguiente inciso final, nuevo:

“En el caso de las sociedades anónimas abiertas, la memoria, el informe de los auditores externos y los estados financieros auditados de la sociedad, deberán ponerse a disposición de los accionistas en el sitio en Internet de las sociedades que dispongan de tales medios.”.

36) Suprímese en el número 4) del artículo 57, la expresión “, o el 50% o más del pasivo”.

37) En el artículo 58, sustitúyese el número 4), por el siguiente:

“4) A junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando así lo requiera la Superintendencia, con respecto a las sociedades anónimas abiertas o especiales, sin perjuicio de su facultad para

convocarlas directamente. En el caso de las sociedades anónimas cerradas, la Superintendencia podrá efectuar la citación a junta ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, cuando el directorio no convoque a junta debiendo hacerlo, en los términos indicados en los incisos anteriores, y así se lo requieran accionistas que representen, a lo menos, el 10% de las acciones emitidas con derecho a voto, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la junta.”.

38) Agrégase en el inciso segundo del artículo 59, a continuación de la expresión “tratadas en ella”, la frase “e indicación de la forma de obtener copias íntegras de los documentos que fundamentan las diversas opciones sometidas a su voto, los que deberán además ponerse a disposición de los accionistas en el sitio en Internet de las sociedades que dispongan de tales medios”.

39) Intercálase en el artículo 60, entre las palabras “podrán” y “celebrarse”, la expresión “auto convocarse y”.

40) Modifícase el artículo 62, de la siguiente forma:

a) Intercálase, en el inciso primero, entre la expresión “días” y la expresión “de”, la expresión “hábiles”.

b) Agrégase, en el inciso primero, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:

“Con todo, podrán participar en reemplazo de los accionistas inscritos a tal fecha, los accionistas que producto de una adquisición debidamente registrada con posterioridad al cierre del registro, hubiesen adquirido el control de una sociedad anónima cerrada.”.

c) Suprímese en el inciso segundo, la expresión “generales”.

d) Agrégase el siguiente inciso final, nuevo:

“Las materias sometidas a decisión de la junta deberán llevarse individualmente a votación, salvo que, por acuerdo unánime de los accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o más materias y se proceda por aclamación. En todas las votaciones que se efectúen en las juntas, el controlador deberá ser siempre el primer accionista en votar y su voto deberá manifestarse de viva voz, debiendo dejar constancia de ello en el acta de la respectiva junta.”.

41) Agrégase al artículo 64, el siguiente inciso final, nuevo:

“La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá autorizar a las sociedades anónimas abiertas, para establecer sistemas que permitan el voto a distancia, siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los derechos de los accionistas.”.

42) Modifícase el artículo 67, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el número 9), entre las palabras “activo,” y “sea que”, la expresión “o el de una filial, siempre que ésta represente al menos un 20% del activo de la sociedad, en su caso,”.

b) Reemplázase en el número 11) el punto final por un punto y coma (;).

c) Reemplázase en el número 13), la expresión “, y” por un punto y coma (;).

d) Agréganse los siguientes numerales 15) y 16):

“15) En las sociedades anónimas abiertas, establecer el derecho de compra a que hace referencia el inciso segundo del artículo 71 bis, y

16) Aprobar o ratificar la celebración de actos o contratos con partes relacionadas, de conformidad a lo establecido en los artículos 44 y 147.”.

e) Intercálase en el inciso final, entre las palabras “modificación” y “o supresión”, la expresión “, prórroga”.

43) Modifícase el artículo 69, de la siguiente forma:

a) Reemplázase el número 3), por el siguiente:

“3) Las enajenaciones a que se refiere el N° 9) del artículo 67;”.

b) Intercálase en el número 5), entre las palabras “aumento” y “o la reducción”, la expresión “, prórroga”.

44) Elimínase el artículo 69 ter.

45) Intercálase el siguiente artículo 71 bis, nuevo:

“Artículo 71 bis. También dará derecho a retiro en favor de los accionistas minoritarios, el que un controlador adquiera más del noventa y cinco por ciento de las acciones de una sociedad anónima abierta.

Este derecho a retiro deberá ser ejercido dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha en que el accionista controlador alcance la participación indicada, lo que se comunicará dentro de los dos días hábiles siguientes a través de un aviso destacado publicado en un diario de circulación nacional y en el sitio en Internet de la sociedad, si ella dispone de tales medios.

Asimismo, cuando así se haya establecido en los estatutos de la sociedad, dicho controlador podrá exigir que todos los accionistas minoritarios que no opten por ejercer su derecho a retiro le vendan sus acciones, siempre que haya alcanzado el porcentaje indicado en el inciso anterior a consecuencia de una oferta pública de adquisición de acciones, efectuada por la totalidad de las acciones de la sociedad anónima abierta, o de la serie de acciones respectiva, en la que haya adquirido, de accionistas no relacionados, a lo menos un quince por ciento de tales acciones. El precio de la compraventa respectiva será el establecido en dicha oferta, debidamente reajustado y más intereses corrientes.

El controlador deberá notificar que ejercerá su derecho de compra dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo previsto para el ejercicio del derecho a retiro indicado en el inciso primero, mediante carta certificada enviada al domicilio registrado en la sociedad por los accionistas respectivos, así como a través de un aviso destacado publicado en un diario de circulación nacional y en el sitio en Internet de la sociedad, si ella dispone de tales medios.

La compraventa se entenderá perfeccionada quince días después de notificado el ejercicio del derecho de compra sin necesidad que las partes firmen el respectivo traspaso, debiendo proceder la sociedad a registrar las acciones a nombre del controlador y poner inmediatamente a disposición de los accionistas el producto de la venta, de la misma forma prevista para el reparto de los dividendos sociales. En el caso de acciones prendadas, la sociedad registrará las acciones a nombre del controlador sin alzar la prenda respectiva, pero retendrá el producto de la venta hasta que ello ocurra. Para estos efectos se aplicará lo dispuesto en el artículo 18 en todo aquello que resulte aplicable.

La Superintendencia, mediante norma de carácter general, podrá establecer los procedimientos y regulaciones que faciliten el legítimo ejercicio de estos derechos.”.

46) Agrégase al artículo 72, el siguiente inciso final:

“En las sociedades anónimas abiertas, el acta de la más reciente junta de accionistas deberá quedar a disposición de los accionistas en el sitio en Internet de las sociedades que cuenten con tales medios.”.

47) Modifícase el artículo 74, de la siguiente forma:

a) Modifícase el inciso tercero, de la siguiente forma:

i) Intercálase entre las expresiones “formulen” y “accionistas que”, la frase “el comité de directores, en su caso, y”.

ii) Reemplázase, a continuación de la palabra “sociales”, la conjunción “y” por una coma (,).

iii) Intercálase entre las palabras “dichos” y “accionistas así”, la expresión “comité o”.

b) Intercálase en el inciso cuarto, entre las palabras “formulado” y “los accionistas mencionados”, la expresión “el comité y”.

48) Intercálase en el inciso segundo del artículo 76, entre la palabra “determine” y el punto final (.), la frase “, y publicarse en el sitio en Internet de la sociedad, si ella dispone de tales medios”.

49) Modifícase el artículo 89, de la siguiente forma:

a) Modifícase el inciso primero de la siguiente forma:

i) Reemplázase la expresión “Las” por las expresiones “En el caso de las sociedades anónimas cerradas, las”.

ii) Reemplázase la frase “y las que efectúe una sociedad anónima abierta, ya sea directamente o a través de otras entidades pertenecientes a su grupo empresarial,” por las expresiones “y aquellas realizadas”.

b) Reemplázase el actual inciso segundo, por el siguiente:

“En el caso de las sociedades anónimas abiertas, se aplicará lo dispuesto en el Título XVI.”.

50) Modifícase el artículo 103, de la siguiente forma:

a) Intercálase en el número 2), entre las palabras “reunirse” y “todas”, la frase “, por un período ininterrumpido que exceda de 10 días,”.

b) Elimínase en el número 3), la expresión “general”.

c) En el número 5), sustitúyese las expresiones “no sometida a la fiscalización de la Superintendencia en razón de esta ley o de otras leyes” por las expresiones “anónimas cerradas”.

51) Modifícase el artículo 107 de la siguiente forma:

a) En el inciso primero, sustitúyese las expresiones “sometida al control de la Superintendencia en razón de esta ley o de otras leyes” por la expresión “abierta o especial”.

b) Reemplázase, en el inciso primero, la palabra “determine” por la expresión “pueda determinar”.

52) En el inciso primero del artículo 119, sustitúyanse las expresiones “sujetas a su fiscalización” por las expresiones “anónimas abiertas o especiales”.

53) Elimínase en el encabezado del Título XI, la expresión “ANÓNIMAS”.

54) Elimínase en el inciso primero del artículo 121, la palabra “anónima”.

55) Agrégase en el inciso final del artículo 125, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente oración:

“Este derecho no podrá ser ejercido por los directores, gerentes, administradores y ejecutivos principales de la sociedad. Tampoco por aquellos accionistas que individualmente posean, directa o indirectamente, acciones cuyo valor libro o bursátil supere las 5.000 unidades de fomento, de acuerdo al valor de dicha unidad a la fecha de presentación de la demanda.”.

56) En el artículo 129, luego del punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.), agrégase el siguiente párrafo: “Salvo que las sociedades anónimas especiales sean emisores de valores, no deberán inscribirse en el Registro de Valores de la Superintendencia, pero deberán cumplir con las obligaciones de información y publicidad que les impongan las leyes o la superintendencia que las rige, y les será aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 7° de la ley N° 18.045.”.

57) Agréganse en el inciso primero del artículo 133 bis, entre las palabras “sociales” y “o” las siguientes expresiones “, las políticas internas definidas por el directorio en conformidad a la ley”.

58) Incorpórase el siguiente Título XVI, nuevo, a continuación del artículo 145, pasando el actual Título XVI a ser Título XVII:

“TITULO XVI

DE LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS ABIERTAS Y SUS FILIALES

Artículo 146. Son operaciones con partes relacionadas de una sociedad anónima abierta toda negociación, acto, contrato u operación en que deba intervenir la sociedad y, además, alguna de las siguientes personas:

1) Una o más personas relacionadas a la sociedad, conforme al artículo 100 de la ley N° 18.045;

2) Un director, gerente, administrador, ejecutivo principal o liquidador de la sociedad, por sí o en representación de personas distintas de la sociedad, o sus respectivos cónyuges o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad inclusive;

3) Las sociedades o empresas en las que las personas indicadas en el número anterior sean dueños, directamente o a través de otras personas naturales o jurídicas, de un 10% o más de su capital, o directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales, y

4) Aquellas que establezcan los estatutos de la sociedad o fundadamente identifique el comité de directores, en su caso, aun cuando se trate de aquellas indicadas en el inciso final del artículo 147.

Artículo 147. Una sociedad anónima abierta sólo podrá celebrar operaciones con partes relacionadas cuando ellas contribuyan al mejor interés social, se ajusten en precio, términos y condiciones a aquellas que prevalezcan en el mercado al tiempo de su aprobación, y cumplan con los requisitos y procedimientos que se señalan a continuación:

1) Los directores, gerentes, administradores, ejecutivos principales o liquidadores que tengan interés o participen en negociaciones conducentes a la realización de una operación con partes relacionadas de la sociedad anónima, deberán informar inmediatamente de ello al directorio o a quien éste designe. Quienes incumplan esta obligación serán solidariamente responsables de los perjuicios que la operación ocasionare a la sociedad y sus accionistas.

2) Antes que la sociedad otorgue su consentimiento a una operación con parte relacionada, ésta deberá ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del directorio, con exclusión de los directores o liquidadores involucrados, quienes no obstante deberán hacer público su parecer respecto de la operación si son requeridos por el directorio, debiendo dejarse constancia en el acta de su opinión. Asimismo, deberá dejarse constancia de los fundamentos de la decisión y las razones por las cuales se excluyeron a tales directores.

3) Los acuerdos adoptados por el directorio para aprobar una operación con una parte relacionada serán dados a conocer en la próxima junta de accionistas, debiendo hacerse mención de los directores que la aprobaron. De esta materia se hará indicación expresa en la citación a la correspondiente junta de accionistas.

4) En caso que la mayoría absoluta de los miembros del directorio deba abstenerse en la votación destinada a resolver la operación, ésta sólo podrá llevarse a cabo si es aprobada por la unanimidad de los miembros del directorio no involucrados o, en su defecto, si es aprobada en junta extraordinaria de accionistas con el acuerdo de dos tercios de las acciones emitidas con derecho a voto.

5) Si se convocase a junta extraordinaria de accionistas para aprobar la operación, el directorio designará al menos un evaluador independiente para informar a los accionistas respecto de las condiciones de la operación, sus efectos y su potencial impacto para la sociedad. En su informe, los evaluadores independientes deberán también pronunciarse acerca de los puntos que el comité de directores, en su caso, haya solicitado expresamente que sean evaluados. El comité de directores de la sociedad o, si la sociedad no contare con éste, los directores no involucrados, podrán designar un evaluador independiente adicional, en caso que no estuvieren de acuerdo con la selección efectuada por el directorio.

Los informes de los evaluadores independientes serán puestos por el directorio a disposición de los accionistas al día hábil siguiente de recibidos por la sociedad, en las oficinas sociales y en el sitio en Internet de la sociedad, de contar la sociedad con tales medios, por un plazo mínimo de 15 días hábiles contado desde la fecha en que se recibió el último de esos informes, debiendo comunicar la sociedad tal situación a los accionistas mediante hecho esencial.

Los directores deberán pronunciarse respecto de la conveniencia de la operación para el interés social, dentro de los 5 días hábiles siguientes desde la fecha en que se recibió el último de los informes de los evaluadores.

6) Cuando los directores de la sociedad deban pronunciarse respecto de operaciones de este Título, deberán explicitar la relación que tuvieran con la contraparte de la operación o el interés que en ella tengan. Deberán también hacerse cargo de la conveniencia de la operación para el interés social, de los reparos u objeciones que hubiese expresado el comité de directores, en su caso, así como de las conclusiones de los informes de los evaluadores o peritos. Estas opiniones de los directores deberán ser puestas a disposición de los accionistas al día siguiente de recibidos por la sociedad, en las oficinas sociales así como en el sitio en Internet de las sociedades que cuenten con tales medios, y dicha situación deberá ser informada por la sociedad mediante hecho esencial.

7) Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la infracción a este artículo no afectará la validez de la operación, pero otorgará a la sociedad o a los accionistas el derecho de demandar, de la persona relacionada infractora, el reembolso en beneficio de la sociedad de una suma equivalente a los beneficios que la operación hubiera reportado a la contraparte relacionada, además de la indemnización de los daños correspondientes. En este caso, corresponderá a la parte demandada probar que la operación se ajustó a lo señalado en este artículo.

No obstante lo dispuesto en los números anteriores, las siguientes operaciones con partes relacionadas podrán ejecutarse sin los requisitos y procedimientos establecidos en los números anteriores, previa autorización del directorio:

a) Aquellas operaciones que no sean de monto relevante. Para estos efectos, se entiende que es de monto relevante todo acto o contrato que supere el 1% del patrimonio social, siempre que dicho acto o contrato exceda el equivalente a 2.000 unidades de fomento y, en todo caso, cuando sea superior a 20.000 unidades de fomento. Se presume que constituyen una sola operación todas aquellas que se perfeccionen en un periodo de 12 meses consecutivos por medio de uno o más actos similares o complementarios, en los que exista identidad de partes, incluidas las personas relacionadas, u objeto;

b) Aquellas operaciones que, conforme a políticas generales de habitualidad, determinadas por el directorio de la sociedad, sean ordinarias en consideración al giro social. En este último caso, el acuerdo que establezca dichas políticas o su modificación será informado como hecho esencial y puesto a disposición de los accionistas en las oficinas sociales y en el sitio en Internet de las sociedades que cuenten con tales medios, sin perjuicio de informar las operaciones como hecho esencial cuando corresponda, y

c) Aquellas operaciones entre personas jurídicas en las cuales la sociedad posea, directa o indirectamente, al menos un 95% de la propiedad de la contraparte.

Artículo 148. Ningún director, gerente, administrador, ejecutivo principal, liquidador, controlador, ni sus personas relacionadas, podrá aprovechar para sí las oportunidades comerciales de la sociedad de que hubiese tenido conocimiento en su calidad de tal. Se entenderá por oportunidad comercial todo plan, proyecto, oportunidad u oferta exclusiva dirigida a la sociedad, para desarrollar una actividad lucrativa en el ámbito de su giro o uno complementario a él.

Los accionistas podrán utilizar para sí tales oportunidades comerciales cuando el directorio de la sociedad las haya previamente desechado, o si hubiere transcurrido un año desde la adopción del acuerdo de postergar o aceptar la oportunidad comercial, sin que se hubiese iniciado su desarrollo.

Sin perjuicio de las sanciones que correspondan, la infracción a este artículo no afectará la validez de la operación y dará derecho a la sociedad o a los accionistas a pedir el reembolso, a favor de la sociedad, de una suma equivalente a los beneficios que la operación hubiere reportado al infractor y los demás perjuicios que se acrediten.

Artículo 149. Las disposiciones de este título serán aplicables tanto a las sociedades anónimas abiertas como a todas sus filiales, sin importar la naturaleza jurídica de éstas.”.

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese en el artículo 430 del Código de Comercio, las expresiones que van desde “La sociedad” hasta “abierta”, por las siguientes: “La sociedad por acciones que durante más de 90 días seguidos tenga 500 o más accionistas o, a lo menos, el 10% de su capital suscrito pertenezca a un mínimo de 100 accionistas, excluidos los que individualmente o a través de otras personas naturales o jurídicas, excedan dicho porcentaje, por el solo ministerio de la ley se transformará en una sociedad anónima”.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo primero transitorio.- Las modificaciones que introduce esta ley regirán a contar del 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo segundo transitorio.- La inscripción de las entidades inscritas en el Registro de Valores que no sean emisores de valores de oferta pública a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley será cancelada, pero pasarán a formar parte y quedarán inscritas, por el solo

ministerio de la ley, en el registro especial de otras entidades informantes referido en el artículo 7°, incorporado por esta ley en la de Mercado de Valores, sin que ello genere derecho a retiro en favor de los accionistas de la sociedad. Para todos los efectos legales que correspondan, se considerará como día de inscripción en el referido registro especial de las entidades antes indicadas, el registro al sexagésimo día de la dictación de la norma de carácter general que deberá dictar la Superintendencia de Valores y Seguros para regular la obligación y requisitos de inscripción de las entidades informantes y sus correspondientes obligaciones de información y publicidad.

Artículo tercero transitorio.- Dentro de los 180 días siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, la Superintendencia de Valores y Seguros deberá dictar una norma de carácter general que constituya el Código del Emisor de Valores de Oferta Pública. Dicha norma de carácter general deberá organizarse por títulos, párrafos y artículos y deberá refundir, sistematizar y reemplazar todas las normas de carácter general y circulares dictadas por la Superintendencia que digan relación con los requisitos de inscripción en el Registro de Valores de emisores de valores y de emisiones de valores y toda información periódica y continua que deban entregar los emisores de valores de oferta pública. Dicho Código deberá, en lo posible, establecer la mayor cantidad de reglas comunes para distintos tipos de emisores y de emisiones de valores, sin perjuicio que deberá también establecer reglas especiales para emisiones de valores considerando las diferentes clases de valores existentes. Cualquier formulario o información específica complementaria de la norma de carácter general, deberá regularse mediante circulares que hagan expresa referencia al artículo correspondiente del Código.

Artículo cuarto transitorio.- Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, la Superintendencia de Valores y Seguros deberá dictar la norma de carácter general referida en el artículo 7°, incorporado por esta ley en la de Mercado de Valores, y que constituya el Código de Otras Entidades Informantes. Dicha norma de carácter general deberá organizarse por títulos, párrafos y artículos y deberá refundir, sistematizar y reemplazar todas las normas de carácter general y circulares dictadas por la Superintendencia que digan relación con los requisitos de inscripción en registros especiales de la Superintendencia de Valores y Seguros y toda información periódica y continua que deban entregar dichas entidades.”.

- - -

Acordado en sesiones celebradas los días 1 y 7 de abril de 2009, con asistencia de los Honorables Senadores señora Evelyn Matthei Fornet (Presidenta) y señores Camilo Escalona Medina, José García Ruminot, Carlos Ominami Pascual (Jaime Gazmuri Mujica) y Hosaín Sabag Castillo.

Sala de la Comisión, a 13 de abril de 2009.

ROBERTO BUSTOS LATORRE

Secretario de Comisión

RESUMEN EJECUTIVO

INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas.
BOLETÍN Nº 5.301-05

- I. PRINCIPALES OBJETIVOS DEL PROYECTO PROPUESTO POR LA COMISIÓN:** perfeccionar la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas.
- II. ACUERDOS:** aprobado en general (Unanimidad 5x0).
- III. ESTRUCTURA DEL PROYECTO APROBADO POR LA COMISIÓN:** la iniciativa está conformada por 3 artículos permanentes y cuatro disposiciones transitorias.
- IV. NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL:** A juicio de vuestra Comisión, el artículo 241 contenido en el número 43) del artículo 1º del proyecto de ley, debe ser aprobado como norma de quórum calificado, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del número 23º del artículo 19 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 66, inciso tercero, de la misma Carta Fundamental.
- V. URGENCIA:** simple.
- VI. ORIGEN INICIATIVA:** mensaje de S.E. la Presidenta de la República.
- VII. TRÁMITE CONSTITUCIONAL:** segundo trámite.
- VIII. APROBACIÓN EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS:** aprobada por 98 votos a favor y ninguno en contra.
- IX. INICIO TRAMITACIÓN EN EL SENADO:** 20 de enero de 2009.
- X. TRÁMITE REGLAMENTARIO:** informe de la Comisión de Hacienda.
- XI. LEYES QUE SE MODIFICAN O QUE SE RELACIONAN CON LA MATERIA:**

- Ley N° 18.045, Ley de Mercado de Valores.
- Ley N° 18.046, Ley de Sociedades Anónimas.
- Código de Comercio

ROBERTO BUSTOS LATORRE
Secretario de Comisión